

**UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA (UCA)
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS**



Trabajo de graduación para optar al Título de Máster en Derecho Penal y Derecho
Procesal Penal

LA EXTRADICIÓN EN EL PROCESO PENAL NICARAGÜENSE

*Autora: Karla María Solórzano Rostrán
Tutor: Róger Alfaro*

Managua. 28 de Junio de 2010

LA EXTRADICIÓN EN EL PROCESO PENAL NICARAGÜENSE

Resumen

La extradición es un acto jurídico de carácter soberano y complejo, que consiste tal y como lo señala Jiménez de Asúa en “La entrega que un estado hace a otro de individuo acusado o condenado que se encuentra en su territorio para que en ese país se le enjuicie penalmente o se ejecute la pena”, tal y como lo establecen nuestras normas internas y de conformidad con lo establecido en los convenios y tratados internacionales firmados y ratificados por Nicaragua.

La extradición nace con el fin de resolver los problemas del principio de territorialidad de los Estados, para lograr que los autores de un delito puedan ser condenados, aún cuando se encuentren en otros territorios por el estado que así lo requiera, y los convenios y tratados internacionales de extradición nacen con el fin de producir efectos jurídicos internacionales por el cual los estados partes se comprometen recíprocamente a entregarse a las personas acusadas o sentenciadas a las autoridades competentes.

Además podemos agregar que los Convenios y Tratados suscritos por Nicaragua se convierten en un instrumento al servicio del proceso penal y constituye una asistencia judicial, que penalmente no es más que el reconocimiento de la extraterritorialidad de la ley penal en el ejercicio del Ius Puniendi.

Índice

I. Introducción. II. Concepto de Extradición. III. Antecedentes. 3.1. Roma. 3.2 Edad media. 3.3. *La revolución francesa* **IV Fuentes. V. Los principios de la extradición.** 5.1. *La influencia de la nacionalidad sobre la extradición.* 5.2 *La índole del delito que puede dar lugar a la extradición.* 5.3. *Principio de la doble incriminación.* 5.4. *Principio "non bis in idem".* 5.5. *Principio de especialidad.* 5.6 *Prohibición de la extradición.* 5.7. *Prescripción de la acción penal o de la pena* **VI. Diferencias entre la extradición y los procesos administrativos para la expulsión, repatriación o deportación y traslado de un extranjero. VII. Clases de extradición.** 7.1 *Extradición Activa.* 7.2 *Extradición pasiva.* 7.3. *Extradición voluntaria.* 7.4. *La reextradición.* 7.6 *Ampliación de extradición.* **VIII. Procedimiento.** 8.1 *Del Procedimiento para la extradición.* 8.2. *Procedimiento administrativo.* 8.3 *Extradición activa.* 8.4 *Extradición Pasiva.* **IX. La Extradición a través de los tratados. X. Extradiciones Activas y Pasivas Tramitadas por el Ministerio Público. XI. Sistema Regional de Cooperación Penal integrado por las Unidades de Cooperación Penal Internacional en los Ministerios Públicos de México, Centroamérica y República Dominicana. XII. Conclusión. XIII. Recomendación. XIV. Bibliografía.**

I. Introducción

Históricamente el Derecho Internacional desarrolló la institución de la extradición con el propósito de resolver una serie de problemas cuando un delincuente se encuentra refugiado en un Estado que no posee jurisdicción sobre él, o ya sea que esté imposibilitado para procesarlo por lo que los medios de prueba se encuentran fuera del país, razón por la cual un Estado procede a la extradición de una persona para que ésta pueda ser juzgada por el país que lo requiere por supuestos delitos cometidos en contra de su ordenamiento jurídico.

“Sobre la naturaleza de la extradición se ha librado un arduo debate. Al preguntarse por la naturaleza se trata de responder a la pregunta qué es en esencia, o cuál es el rasgo fundamental de esta institución. Existen enfoques generales que, como el de Jiménez de Asúa, basado en Franz von Liszt la ven como "un acto de asistencia jurídica internacional" criterio por cierto muy difundido. Pero otros puntos de vista, quizá mucho más técnicos, señalan la naturaleza eminentemente normativa de la extradición. Esa percepción lleva a tener como fuentes de

extradición los tratados, las leyes y, aún ahí donde se reconoce fuerza de derecho positivo, las costumbres y la reciprocidad, trasladándose la discusión al terreno de si la materia extradicional es Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, parte del Derecho Internacional Público o bien una rama del Derecho totalmente autónoma e independiente, el llamado Derecho Extradicional. De todo ese debate lo importante es tener claro que el instituto de la extradición es en efecto normativo.

Su existencia es posible gracias al derecho positivo vigente y su regulación se encuentra en los convenios y tratados internacionales, tanto como en las constituciones y leyes internas de cada nación moderna. En ese sentido los tratados declaran expresamente la materia que rigen y subsidiariamente la ley interna”¹.

II. Concepto de extradición

Extradición²: Es un procedimiento judicial en el que los tribunales de un país deciden la entrega o no de un delincuente que es reclamado por los tribunales de otro Estado.

Principalmente se trata de una figura judicial, pero debe tenerse presente que dentro de todo el procedimiento se efectúan actividades extrajudiciales en cierto modo, así las intervenciones de los ministerios de asuntos exteriores.

Según se vea desde el punto del país que reclama o del país que es reclamado, se tratará de una “extradición activa” o de una “extradición pasiva”.

Para que se conceda la extradición, el hecho imputado al delincuente ha de ser delito tanto en el país que lo reclama como en el país reclamado; también es

¹ Arroyo Gutiérrez, José Manuel. La extradición. Nociones y Principios Generales, en: Ciencias Penales. Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. Año 1, No. 1. www.fgr.cr/.../Extradicion/LA%20EXTRADICION%202.doc, consultado el 21 de Octubre de 2009

² Moro Tomás Diccionario Jurídico Fundación, Espasa Calpe, Madrid 1992.

necesario que la causa por la que se concede esté especificada en Ley o Convenio entre los dos países.

No cabe el que se concede la extradición por los delitos políticos (el terrorismo no se considera como delito político), ni por delitos militares, como tampoco por simples faltas penales o infracciones administrativas (que no sean delito).

Una vez que se conceda la extradición de una persona, ésta sólo podrá ser juzgada por los delitos por los que se pidió la extradición, nunca por otros; ni tampoco cabe el que sea condenado a pena de muerte ni sometido a un tribunal especial (a estos extremos debe comprometerse el Estado requirente).

Es importante señalar que un estado nunca podrá extraditar a un súbdito nacional suyo (J.L.G.A-V)

Jiménez de Asúa ³define la extradición como: “La entrega que un estado hace a otro de individuo acusado o condenado que se encuentra en su territorio para que en ese país se le enjuicie penalmente o se ejecute la pena”.

Este autor destaca como elementos principales de un proceso de extradición:

La entrega de una persona que ha cometido un delito o que probablemente lo cometió; la presunción, de que buscando escapar de la acción de la justicia del Estado donde cometió o que probablemente cometió el delito (Estado requirente), se ha desplazado al territorio del Estado que realiza la entrega (Estado requerido); y los objetivos de la entrega de la persona: que sea sometido al proceso penal o para que se ejecute una sentencia sobre él.

³ Jiménez de Asúa, Citado por Gaete González, Eugenio. *La Extradición ante la Doctrina y la Jurisprudencia*. Escuela de Derecho de Valparaíso, Santiago de Chile, editorial Andrés Bello, 1972, pág.14.

En el Derecho Internacional, según Monroy Cabra “la extradición es el acto jurídico complejo de carácter soberano, consistente en la entrega que un Estado hace a otro, de una persona acusada o reconocida culpable penalmente por un delito común político, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos en sus reglamentos internos, o contemplados en tratados internacionales preexistentes a la comisión del hecho punible o en la reciprocidad, con el fin de que se juzgue o que se haga cumplir la pena impuesta”⁴.

III. Antecedentes

La institución de la extradición surgió, en el marco de las relaciones interestatales, resultado de los acuerdos amistosos concertados entre ciertos reyes y sus enemigos personales, la extradición apareció primero en el plano político.

A mediados del siglo XVIII, con el advenimiento de las monarquías absolutistas la única extradición que se practicaba era la de los reos políticos.

Pero luego surgió un convenio que fue celebrado entre Carlos III de España y Luis XV de Francia, el 29 de septiembre de 1765, significó desde luego un adelanto en la materia, pues sin excluir a los delincuentes políticos únicos extraditables hasta entonces, perseguía la entrega de los culpables de delitos comunes más graves.

El surgimiento del constitucionalismo moderno, junto con una nueva idea de los derechos del hombre y del ciudadano, conlleva a un Estado de derecho que implica serias limitaciones al poder estatal.

Un ejemplo muy representativo de esta nueva corriente de ideas la encontramos en el Tratado de Paz de Amiens de 1802, celebrado entre España, Francia e Inglaterra,

⁴ Monroy Cabra, Citado por Gómez Tamara Adriana Lucía, *La extradición en Colombia, “Un Problema Procesal”*, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Derecho, Santa Fe de Bogotá, D.C., 1999.

en el cual se aseguraba la extradición de la delincuencia común, con exclusión total de la extradición política.

La expresión extradición como se la conoce actualmente es de uso relativamente reciente, el término apareció por primera vez en el Decreto de la Convención Francesa del 19 de febrero de 1791, esto no significa que no existiesen procedimientos similares a la extradición, en general la práctica se originó en las antiguas civilizaciones no occidentales siendo la entrega del delincuente mas que un procedimiento formal una expresión de amistad y cooperación entre soberanos.

El Tratado de Paz celebrado entre Ramsés II de Egipto y Hattusil III –Rey de los Hititas- de 1280 A.C. es el documento diplomático más antiguo de la humanidad. Este documento escrito en jeroglíficos está grabado en el templo de Ammon, en Karnak. La historia refiere que este Tratado en lengua acadia y egipcia puso fin a las hostilidades entre dos pueblos. En este Tratado ambos soberanos se comprometían a entregarse recíprocamente los delincuentes súbditos del Estado peticionario y éste se comprometía a tratar con indulgencia a los entregados⁵. Un artículo de ese Tratado señalaba "(...) Tanto ellos como sus bienes, mujeres, hijos y sirvientes deberán ser devueltos completamente intactos. No hay que ajusticiarlos, ni dañar sus ojos, sus bocas o sus pies".

3.1. *Roma*

En el caso de Roma, ésta conoció una especie de práctica de extradición por la cual pedía la entrega de ciertos delincuentes, romano o extranjero, con la salvedad de que la exigencia iba acompañada de una suerte de declaratoria de guerra por considerar el Estado que la no entrega significaba protección del delincuente y por consiguiente complicidad con el ultraje.

⁵ Jiménez de Asúa. Tratado de Derecho Penal, Editorial Losada S.A., Buenos Aires. Tomo II, pág. 893.

Por esta razón no se le consideró propiamente extradición (falta de cooperación soberana y libre) explicándose la conducta por cuanto en la Ley XVII Libro L Título VII del Digesto se disponía que el individuo que ofendiese a un Embajador debía ser prestado al Estado al que pertenecía el Embajador ofendido⁶. Este hecho no tiene carácter de extradición ya que se trata más bien de una de las aplicaciones de la regla según la cual el señor responsable de los delitos cometidos por su esclavo puede librarse de responsabilidad entregándolo a la parte ofendida.

3.2. *Edad media*

En la edad media el derecho de asilo dificultó la extradición durante muchos siglos. La edad media no fue mucho más favorable a la extradición que la edad antigua, más por otras razones. En la antigüedad se conoció y practicó el derecho de asilo sagrado, pero no el derecho de asilo territorial fundado en el principio de la soberanía, sin embargo se encuentran Convenios citando el de Licardo, Príncipe de Benevento con los magistrados de Nápoles en el año 836, Venecia y el Emperador Lotario de 840 y el de Federico II y Venecia de 1220.

La edad media se caracterizó por el desprecio de los derechos individuales, por soberanos despóticos; la soberanía reside en el monarca, el Estado es el Rey y las relaciones internacionales se resuelven en guerras continuas. Esta época se caracterizó por la supremacía internacional del pontificado mediante la potestad espiritual y el poder temporal⁷, en realidad los primeros convenios fueron en interés exclusivo de los soberanos, citando además el celebrado en 1174 entre el Rey de Inglaterra Enrique II y Guillermo de Escocia en el que se "estipulaba la entrega de los individuos culpables de felonía que fuesen a refugiarse en uno u otro país". Aun cuando existan otros antecedentes como los ya glosados, no se les concede el

⁶ Jiménez de Asúa, *Tratado de Derecho Penal*, Editorial Losada S.A., Buenos Aires Tomo II, pág. 891.

⁷ Monroy Cabra, Marco Gerardo. *Derecho Internacional Público*. Editorial Temis S.A. Bogotá. Colombia.

carácter de extradición por cuanto tuvieron como causa intereses particulares (enemigos personales del soberano).

La Convención del 4 de marzo de 1376 entre Carlos V –Rey de Francia y la Corte de Saboya es un verdadero tratado internacional que tenía por objeto impedir que los acusados por delitos de derecho común fuesen desde Francia a refugiarse en el Delfinado o en Saboya, y recíprocamente.

En 1360 se reconoce el Tratado celebrado entre Pedro I Rey de Castilla y el Rey de Portugal con el fin de realizar entregas recíprocas de varios caballeros condenados a muerte y que se habían refugiado en ambos reinos. En 1499 los Reyes Católicos y el Rey de Portugal celebraron un tratado para la entrega de delincuentes que mataran con ballesta o con fines de robo y salteadores de camino. En 1569 Felipe II celebró otro Tratado relativo a los delitos de lesa majestad, robo y hurto, rapto, homicidio ejecutado con ballesta, arcabuz y escopeta y quebrantamiento de cárcel. En los siglos XVII y XVIII el objeto de la extradición fueron los delitos políticos puesto que eran tiempos de absolutismo y los gobiernos consideraban a los reos políticos como los más peligrosos delincuentes. Por tanto las primeras extradiciones fueron ejecutadas contra aquellos que más tarde, en el siglo XIX habían de ser exceptuados de la entrega. En 1765 Carlos III Rey de España celebró un Acuerdo con el Rey de Francia referente a los delitos de robo en caminos reales e iglesias, robos con fracturas en lugares habitados, asesinatos, incendios, envenenamientos, estupros y falsificación de moneda. En él se disponía la entrega de los delincuentes aun cuando se hubieran refugiado en iglesia o en cualquier asilo privilegiado; pero en este caso no se les podía imponer pena de muerte. Cabe destacar que es importante esta referencia porque es un antecedente para los pedidos contemporáneos de sustitución de la pena de muerte como condición previa a la concesión de la extradición.

Para los efectos del Derecho Internacional, la noción de soberanía comporta en ella misma la exclusividad, según el Dr. Alonso Gómez Robledo⁸, y sigue diciendo que la autonomía y la plenitud de la competencia territorial, pero obviamente de dichos atributos de la soberanía, no pueden concebirse de manera absoluta, más cuando se hace referencia al orden jurídico interno, pues en el orden internacional, tales atributos llegan a relativizarse.

En consecuencia un Estado X, cualquiera, no podría someter a un Estado Z a su jurisdicción, porque ello equivaldría a negar la regla de igualdad, en la medida que el Estado Z, se encontraría así sometido al Estado X. La soberanía no es un concepto inmutable y va transformándose en forma compleja.

Hoy en día se encuentra atrapada entre la independencia y la interdependencia, no debiéndose sacrificar un término por otro, sino al contrario, buscando un esfuerzo; así es como encontramos añadido a estos preceptos la figura de la extradición.

Entre los aspectos esenciales de la extradición se configuran diez puntos importantísimos, como lo es: la extradición es un acto de Estado, ya que es el Gobierno requirente quien dirige al Gobierno requerido una solicitud, a la cual éste puede dar o no satisfacción.

Es también un acto de soberanía, fundado en principio de reciprocidad lo que implica tanto relaciones de igualdad entre Estados soberanos, como un consentimiento manifestado por éstos, en función de la reciprocidad, en el marco de tales relaciones.

⁸ Gómez-Robledo Verduzco Alonso; *Extradición en Derecho Internacional. Aspectos y tendencias relevantes*. Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie H: Estudios de Derecho Internacional Público N° 24, Segunda Edición, 2000.

Es de suma importancia que en el orden jurídico interno e internacional, está ligada a la justicia más allá de las fronteras de un Estado, sea solicitando, sea consintiendo la extradición de un delincuente.

Representa un acto de solidaridad represiva internacional, que se sitúa en el marco de las relaciones de cooperaciones y asistencia mutua, a fin de evitar la impunidad del crimen y asegurar el castigo de los delincuentes.

Únicamente procede por delitos de orden común. Es una institución jurídica mixta, ya que su regulación se hace tanto mediante el derecho interno, como a través de tratados bilaterales o convenios multilaterales.⁹

La figura de la extradición, dice García Barroso¹⁰, es hoy una de las manifestaciones más tangibles de solidaridad que une a los países del mundo en la lucha contra el crimen. Es una de las instituciones jurídicas que ha adquirido mayor relevancia en el derecho contemporáneo y, sin embargo, muchos autores consideran que fue practicada desde tiempos antiguos.

Desde Roma y Grecia, que regularon estatutos especiales para los extranjeros, pasando por los tratados de extradición que celebraban algunos soberanos para la mutua entrega de algunos delincuentes, obviamente basados en el libre arbitrio del soberano, hasta la creación del derecho de asilo, la extradición no mostraba el perfil que actualmente tiene; sino que se limitaba a ser un acto de orden político,

⁹ Troccoli Lugo, José Vicente La extradición, es un proceso por el cual un Estado entrega una o varias personas que se hayan en su territorio, a las autoridades de otro Estado. www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=23930-39k, consultado 20 de Septiembre de 2009.

¹⁰ Participación de la Señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en EL XIII Simposium Internacional de derecho “Tendencias jurídicas del siglo XXI”, Organizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 19 de Octubre de 2001. www2.scjn.gob.mx/Ministros/.../Extradición, consultado 11 de Noviembre de 2009.

supeditado a la voluntad soberana de un Estado o un monarca y regido particularmente por el principio de reciprocidad.

Esta connotación política dio a la extradición esa particular naturaleza de acto acomodaticio a las circunstancias históricas de cada periodo y cada lugar en el que se estudiara.

Pero no es sino hasta el siglo XIX que la extradición adquiere ese perfil de acto de cooperación internacional que hemos señalado, y es precisamente derivado de un interés común supranacional de castigar los actos delictivos, sin limitaciones territoriales, y en la recíproca confianza en la actividad judicial de los Gobiernos. Así, la institución nace al mundo de lo jurídico en el campo del Derecho Internacional, bajo esas dos premisas fundamentales.

Ciertamente, en los primeros años de su regulación, fueron principalmente reos políticos los extraditados y la decisión soberana de extraditar casi arbitraria. Pero con el tiempo, las circunstancias han dado lugar a otro tipo de extraditables y a otro tipo de procedimientos de extradición.

El aumento en las formas de delincuencia (tenemos ahora ejemplos tristemente muy recientes), el narcotráfico, el crimen organizado, los delitos informáticos, entre otras modalidades delictivas, han socavado los cimientos de nuestras sociedades y han provocado nuevas formas de combatir a la delincuencia, entre las que se encuentran los tratados para la extradición de reos o los tratados para el combate de delitos especiales como los celebrados en materia de terrorismo y narcotráfico.

El antiguo sistema de extradición ha sido reemplazado en nuestros días por un sistema más sencillo que se basa principalmente en la naturaleza del delito y la duración de la pena y que adhiere en un solo tratado a un mayor número de

Estados. Prueba de ello son los todavía insuficientes tratados multilaterales de extradición que han sido firmados.

No se concede extradición si se considera que ha sido solicitada con el fin de perseguir o castigar por motivo de religión, nacionalidad, opinión o raza.

El hecho que motive la extradición ha de estar tipificado como delito en la legislación de ambos estados, requirente y requerido. No se requiere que nominalmente sea igual, sino que materialmente el hecho sea típico en ambas legislaciones al momento de realizarse y que subsista aquel en que se lleva a cabo la entrega.

Lo anteriormente planteado por García Barroso, es una clara evolución de lo que ha sido la extradición en la legislación nicaragüense, la cual se ha visto fortalecida con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal y Código Penal en el año dos mil dos.

3.3. *La Revolución Francesa*

La Revolución Francesa (finales del siglo XVIII) trae consigo el reconocimiento de los derechos del hombre frente absolutismo monárquico. La revolución Francesa vino a sentar las bases del moderno estado de derecho republicano y, con ello, toda la ideología iluminista, liberal en lo económico y humanista en lo político, y pone en el centro de discusión los derechos del hombre¹¹. El nuevo enfoque planteó la necesidad de deslindar la persecución política y la persecución por delito común. La revolución liberal en su lucha contra los poderes del absolutismo cambió el concepto del delito de lesa majestad que era el más grave de todos, para considerar al delincuente político como el que delinque por impulsos nobles y altruistas

¹¹ Arroyo Gutiérrez, José Manuel. *La extradición. Nociones y Principios Generales*, en: Ciencias Penales. Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. Año 1, No. 1. www.fgr.cu/.../Extradicion/LA%20EXTRADICION%202.doc, consultado el 21 de Octubre de 2009

pugnando por un mundo mejor donde se reconozcan los derechos del hombre, esto es, el ciudadano que se enfrenta al absolutismo por la libertad y la democracia.

Para el pensamiento liberal el delincuente político no era un verdadero criminal sino un ser totalmente inocuo desde el punto de vista de la peligrosidad social y su conducta fue valorada como un comportamiento perfectamente lícito y honroso en virtud de los ideales a los que servía; esto tendría como repercusión, que la legislación liberal tratase con especial lenidad no exenta de consideración el fenómeno de la delincuencia política, protegiendo al perseguido político mediante la concesión del derecho de asilo (aspecto positivo) y la consiguiente denegación de su extradición (aspecto negativo).

IV. Fuentes

La naturaleza normativa de la extradición, señala como fuentes de ella, en primer lugar a los convenios y tratados internacionales; en segundo lugar, a las leyes internas y, finalmente, a las costumbres y declaraciones de reciprocidad ahí donde tienen fuerza de derecho positivo¹². Al respecto, Nicaragua ha suscrito y ratificados convenios bilaterales y multilaterales en ese sentido los cuales enunciaré más adelante, en cuanto a las leyes internas El Código Procesal Penal ha dedicado el capítulo V del Título IV de los Procedimientos Especiales al Procedimiento para la extradición, asimismo el Código Penal en el Título Preliminar relacionado con las garantías penales y de la aplicación de la ley penal dedica tres artículos referente a la extradición.

El tratado de extradición es un acuerdo entre dos o más Estados soberanos mediante el cual se comprometen a la entrega recíproca de los fugitivos por delitos comunes. Generalmente contiene el tratado una serie de condiciones y

¹² Jiménez de Asúa, *Tratado de Derecho Penal*, Editorial Losada S.A., Buenos Aires, 1964. T II, p. 899.

formalidades que definen en qué casos procede la extradición. El tratado es sin duda el instrumento más utilizado modernamente para regir esta materia.

A la par de los tratados, se encuentran las leyes internas de cada país. Debe anotarse que los sujetos de unos -los tratados, y otros -leyes- son distintos, pues los primeros se dirigen a reglar las relaciones entre Estados, mientras los segundos regulan los órganos estatales internos de cada nación¹³.

El futuro, un tanto idealizado, apunta a concebir "tratados tipo" de extradición, tal y como lo fue el Código de Bustamante, de indudable vigencia y resultados positivos en muchos países de América del cual Nicaragua es parte. La existencia de este tipo de tratados permitiría unificar las reglas de extradición en una mayoría importante de países¹⁴.

V. Los principios del derecho de extradición

Existen múltiples disposiciones relativas a la extradición y cada asunto debe ser considerado como un caso distinto, de conformidad con las disposiciones aplicables. No obstante, en los convenios y tratados suscritos y ratificados por Nicaragua encontramos recogidos los siguientes principios que también se encuentran en la mayoría de los tratados de extradición.

5.1. La influencia de la nacionalidad sobre la extradición

En muchos países, el principio consiste en que un Estado puede negarse a la extradición de sus nacionales, en cuyo caso, se comprometerá a juzgarlos de conformidad con su propia legislación. Se trata de la aplicación del principio "*aut*

¹³ Jiménez de Asúa, *Tratado de Derecho Penal*, Editorial Losada S.A., Buenos Aires, 1964 T. II, pp. 900-901.

¹⁴ Jiménez de Asúa, *Tratado de Derecho Penal*, Editorial Losada S.A., Buenos Aires, 1964 T. II, p. 903.

tradere, aut iudicare"¹⁵ (ya extraditar, ya juzgar). Este Principio se encuentra establecido en la Constitución Política en su artículo 43 parte *in fine* que dice “Los Nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional”. Asimismo lo recoge el Código Penal de Nicaragua en su artículo 19 denominado Principio de no entrega de nacionales que establece que “El Estado de Nicaragua por ningún motivo podrá entregar a los nicaragüenses a otro Estado.

Tampoco se podrá entregar a la persona que al momento de la comisión del hecho punible, hubiese tenido nacionalidad nicaragüense.

En ambos casos, si se solicita la extradición, el Estado de Nicaragua deberá juzgarlo por el delito común cometido. Si el requerido ha cumplido en el exterior parte de la pena o de la medida de seguridad impuesta, ellas le serán abonadas por el Juez”¹⁶.

5.2. *La índole del delito que puede dar lugar a la extradición*

Se admite en el derecho internacional sobre extradición que los delitos políticos no pueden dar lugar a la extradición. Dado que ningún texto internacional aporta una definición precisa del delito político, corresponde al Estado requerido el decidir si se trata de un delito político o no. La constitución Política de Nicaragua establece en su artículo 43 que “En Nicaragua no existe extradición por delitos políticos o comunes conexos con ellos según calificación nicaragüense. La extradición por delitos comunes está regulada por la ley y los tratados internacionales...”¹⁷ Sin embargo la Constitución de Nicaragua no define ni enumera los delitos políticos o comunes conexos, tampoco el Código Penal establece que es delito político.

¹⁵ Guía Jurídica del Secretario General de la OIPC-INTERPOL a los Jefes de Oficinas Centrales, Nacionales, Lyon, 16 de Marzo de 1998.

¹⁶ Ley No. 641 Código Penal, Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nos. 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7, 8 y 9 de Mayo del 2008.

¹⁷ Constitución Política de Nicaragua y sus Reformas, Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 68 del 8 de Mayo de 2005.

Sin embargo en la conferencia de Copenhague, celebrada en 1935 aunque de forma complementaria en aspecto, y explícitamente, pero de modo negativo, en otro, se introdujo el móvil y quedo exceptuado el terrorismo. Las resoluciones aprobados sobre esta cuestión llevaba esa rubrica “Definición de delito político en el plan internacional” y comprende estos párrafos: Párrafo 1º “Son delitos políticos las infracciones dirigidas contra la organización o el funcionamiento del Estado, así como las dirigidas contra los derechos que de ello se derivan para el ciudadano, párrafo 2º Son reputados políticos los delitos de derecho común que constituyen la ejecución de un delito político, o para permitir al autor de este delito escapar a la aplicación de la ley penal, párrafo 3º. Sin embargo, no serán considerados políticas las infracciones que creen un peligro común o un estado de terror”¹⁸.

En suma en el proyecto de ley-tipo que se aprobó en Copenhague, el art 6º se limita a decir en su inciso c) que no ha lugar a la extradición cuando se trate “de delitos políticos”, ha de entenderse por tales definidos en las resoluciones respecto al primer tema.

En relación con el móvil o finalidad de los delitos políticos, la Organización de Estados Americanos ha señalado lo siguiente:

“Los delitos políticos se caracterizan por el objeto o móvil que ha determinado la ofensa, objeto o móvil de naturaleza altruista y que consiste en tener en la mira la instauración de un ordenamiento político jurídico diferente del que está en vigor y que se considera con razón o sin ella, éticamente superior a éste”¹⁹.

¹⁸ Jiménez de Asúa, Introducción al Derecho Penal, Volumen 1, p 342, 343. Editorial Losada S. A., Buenos Aires, 1964.

¹⁹ Caracterización del delito político de la OEA citado en Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; *Terrorismo o rebelión. Propuestas de regulación del conflicto armado*, Bogotá, diciembre de 2001, pág.60.

En el caso de delitos complejos (delitos de derecho común por naturaleza, pero con motivación política), la tendencia actual es restringir el alcance de la noción de delito político con el objeto de poder realizar la extradición (véase por ejemplo el Convenio Europeo sobre represión del terrorismo²⁰, en el que se enumeran los delitos que no se considerarán delitos políticos a efectos de la extradición).

Por otra parte, a diferencia de los tratados más antiguos, que contienen una lista de los delitos que dan lugar a la extradición, los tratados más recientes definen estos delitos en términos generales, en función de su gravedad y de la pena aplicable (por ejemplo, la duración mínima de la pena de privación de libertad).

Hasta la fecha la comunidad internacional no se ha puesto del todo de acuerdo a lo que se refiere a la definición de lo que deba entenderse como “delito político”, por lo que se puede concluir que el delito político en la mayoría de casos es “un asunto del contexto propio en el que se realizó y de las circunstancias de la época”²¹. Le corresponde a cada Estado decidir de acuerdo a su legislación interna qué es delito político y por consiguiente dar o no lugar a las solicitudes de extradición.

²⁰ Convenio Europeo sobre represión del terrorismo, Artículo 1 A los efectos de la extradición entre los Estados contratantes, ninguna de las infracciones mencionadas a continuación será considerada como infracción política, como infracción conexa a una infracción política o como infracción inspirada en móviles políticos.

- a) Las infracciones comprendidas en el campo de aplicación del Convenio para la represión de la captura ilícita de aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970;
- b) las infracciones comprendidas en el campo de aplicación del Convenio para la represión de actos ilícitos dirigidos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971;
- c) las infracciones graves constituidas por un ataque contra la vida, la integridad corporal o la libertad de las personas que tienen derecho a una protección internacional, incluidos los agentes diplomáticos;
- d) las infracciones que implican rapto, toma de rehenes o secuestro arbitrario;
- e) las infracciones que implican la utilización de bombas, granadas, cohetes, armas de fuego automáticas o cartas o paquetes con explosivos en la medida en que esta utilización presente un peligro para las personas;
- f) la tentativa de cometer algunas de las infracciones antes citadas o la participación como coautor o cómplice de una persona que comete o intenta cometer tal infracción.

²¹ Gomez-Robledo Verduzco Alonso; *Extradición en Derecho Internacional. Aspectos y tendencias relevantes*. Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie H: Estudios de Derecho Internacional Público N° 24, Segunda Edición, 2000. Pág 116- 117.

5.3. *Principio de la doble incriminación*

Según este principio, el delito que motiva la extradición debe ser punible en el Estado requirente y debería ser punible en el Estado requerido si hubiera sido cometido en este último. En virtud de este principio, la extradición puede ser denegada si se hubiera producido la prescripción en el Estado requerido. Este principio se debilita progresivamente.

Lo anterior se encuentra contenido como principio de legalidad en el Código Penal y Procesal Penal en el artículo uno respectivamente y, que literalmente señala: “Ninguna persona podrá ser condenada por una acción u omisión que no esté prevista como delito o falta por ley penal anterior a su realización. Las medidas de seguridad y las consecuencias accesorias sólo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente por la ley.

No será sancionado ningún delito o falta con pena, medida de seguridad o consecuencia accesoria que no se encuentre prevista por la ley anterior a su realización.

No se podrán imponer, bajo ningún motivo o circunstancia, penas o consecuencias accesorias indeterminadas.

Las leyes penales, en tanto fundamenten o agraven la responsabilidad penal, no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.

Por ningún motivo la Administración Pública podrá imponer medidas o sanciones que impliquen privación de libertad”²².

“Nadie podrá ser condenado a una pena o sometido a una medida de seguridad,

²² Ley No. 641 Código Penal, Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nos. 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7, 8 y 9 de Mayo del 2008.

sino mediante una sentencia firme, dictada por un tribunal competente en un proceso conforme a los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política a las disposiciones de este Código y a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República”²³.

5.4. *Principio "non bis in idem"*

De conformidad con este principio, no se concederá extradición cuando la persona reclamada ya ha sido juzgada por los mismos hechos que motivan la solicitud de extradición. No obstante, si la persona reclamada se ha beneficiado de un indulto, puede ser juzgada de nuevo, de conformidad con algunos tratados de extradición recientes.

Este principio lo señala la Constitución Política de Nicaragua en su artículo 34, numeral 10 en lo referente a las garantías mínimas a las que tiene derecho todo procesado estableciéndolo de la siguiente forma “A no ser procesado nuevamente por el delito por el cual fue condenado o absuelto mediante sentencia firme”²⁴.

5.5. *Principio de especialidad*

Este principio significa que la persona para la que se solicita la extradición solamente puede ser encausada, juzgada y encarcelada por los hechos que motivaron la extradición o posteriores a la misma. Si la persona ha sido extraditada en virtud de una condena, sólo podrá cumplir la pena impuesta en la sentencia condenatoria por la que concedió la extradición.

²³ Ley No. 406 Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 243 y 244 del 21 y 24 de Diciembre del 2001.

²⁴ Constitución Política de Nicaragua y sus Reformas: Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 68 del 8 de Mayo del 2005.

El principio de especialidad exige que la persona entregada sea juzgada sólo por los hechos que motivaron la solicitud de extradición y tal como fueron calificados. Si el Estado requirente descubre posteriormente a la extradición unos hechos anteriores a esta fecha que considera punibles, solicitará al Estado requerido el consentimiento para juzgar a la persona entregada por estos nuevos hechos (solicitud de ampliación de la extradición).

La Constitución Política de Nicaragua señala este principio en su artículo 34, numeral 11 de en lo referente a las garantías mínimas a las que tiene derecho todo procesado estableciéndolo de la siguiente forma “A no ser procesado ni condenado por acto u omisión que, al tiempo de cometerse, no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como punible, ni sancionada con pena no prevista en la ley. Se prohíbe dictar leyes proscriptivas o aplicar al reo penas o tratos infamantes”²⁵.

Asimismo el Código Penal en su artículo 4 establece el Principio de la dignidad humana el que establece que “el Estado garantiza que toda persona a quien se atribuya delito o falta penal tiene derecho a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. No podrán imponerse penas o medidas de seguridad que impliquen torturas, procedimientos o tratos inhumanos, crueles, infamantes o degradantes”²⁶.

Por otra parte El Código Procesal Penal recoge en su artículo 356 numeral 6 dicho principio el cual establece refiriéndose al trámite que realiza la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia “Dictará resolución concediendo o negando la extradición dentro de los diez días siguientes a los plazos indicados anteriormente y podrá condicionarlo en la forma que considere oportuna. En todo caso, deberá

²⁵ Constitución Política de Nicaragua y sus Reformas, Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 68 del 8 de Mayo del 2005.

²⁶ Ley No. 641 Código Penal, Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nos. 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7, 8 y 9 de Mayo del 2008.

solicitar y obtener del país requirente, promesa formal de que el extraditado no será juzgado por un hecho anterior diverso ni sometido a sanciones distintas a las correspondientes al hecho o de las impuestas en la condena respectiva, copia de la cual el país requirente remitirá a nuestros tribunales”²⁷.

5.6. *Prohibición de la extradición*

Si el Estado requerido no inflige la pena capital a sus propios reos, o si no ejecuta dicha pena aunque se encuentre entre las penas aplicables, puede denegar la extradición cuando la persona reclamada pueda ser objeto de esta pena en el Estado requirente, salvo si éste da seguridades suficientes de que la pena capital no será ejecutada.

En este sentido por precepto constitucional en Nicaragua no existe pena de muerte.²⁸

5.7. *Prescripción de la acción penal o de la pena*

Constituye otro aspecto de gran importancia en esta materia, pues no se concederá la extradición si la acción penal o la pena han prescrito conforme a la legislación interna del Estado requirente o la del Estado requerido.

En el caso concreto de Nicaragua nuestra legislación establece que los plazos de la prescripción²⁹ de la acción penal se computarán³⁰ desde el día en que se haya cometido la infracción punible. En los casos de delito continuado y delito

²⁷ Ley No. 406 Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 243 y 244 del 21 y 24 de Diciembre del 2001.

²⁸ Art. 24 Constitución Política de Nicaragua y sus Reformas, Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 68 del 8 de Mayo del 2005.

²⁹ Art.131 Ley No. 641 Código Penal, Publicada en La Gaceta, Diario oficial Nos. 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7, 8 y 9 de Mayo del 2008.

³⁰ Art.132 Ley No. 641 Código Penal, Publicada en La Gaceta, Diario oficial Nos. 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7, 8 y 9 de Mayo del 2008.

permanente, tales plazos se computarán respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción y desde que se eliminó la situación ilícita.

En caso de que la prescripción se interrumpa, queda sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra el culpable, y comenzará a correr de nuevo el término de la prescripción desde que se paralice el procedimiento o se termine sin condena, sin perjuicio de las otras causales que establece el Código Procesal Penal.

En caso de que no se ejerza oportunamente la acción penal en los delitos contra la libertad e integridad sexual, cometidos en perjuicio de niños, niñas o adolescentes, el plazo de prescripción de la acción penal iniciará a partir del día en que el ofendido adquiriera la mayoría de edad.

En caso de la prescripción de la pena ³¹se computará desde la fecha de la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta se comenzó a cumplir; o, desde que se revoque la condena de ejecución condicional o la libertad condicional.

VI. Diferencias entre la extradición y los procesos administrativos para la expulsión, repatriación o deportación y traslado de un extranjero.

Debido a que el proceso de extradición y los procesos administrativos de expulsión, repatriación o deportación y el traslado de un extranjero, tienen en común que buscan expulsar, pero que se diferencian por ser la expulsión, repatriación o deportación procedimientos de orden administrativos y la extradición y el traslado procedimientos de orden judicial, y que por lo tanto estos últimos garantizan que la persona extraditada o trasladada sea enviada la primera al país que solcito la extradición y la segunda al país de origen.

³¹ Art.134 Ley No. 641 Código Penal, Publicada en La Gaceta, Diario oficial Nos. 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7, 8 y 9 de Mayo del 2008.

A continuación veremos las diferencias entre los procesos entre la extradición y los procesos administrativos para la expulsión, repatriación o deportación y traslado de un extranjero.

La extradición es distinta de:

- 1) La expulsión, que se realiza por motivos internos (a menudo administrativos) del Estado que expulsa;
- 2) La prohibición de entrada, que consiste en impedir la entrada de una persona en la frontera;
- 3) La repatriación, que se sitúa fuera del ámbito penal;
- 4) El traslado, noción que tiene su origen en el Estatuto del Tribunal Internacional encargado de enjuiciar a los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991. Se trata de trasladar ante el Tribunal a una persona encausada inicialmente por un tribunal nacional, en virtud del principio de la primacía del Tribunal sobre las jurisdicciones nacionales para el enjuiciamiento de los delitos que se sitúan en su ámbito de competencias.

La entrega de una persona, según está definida por la Unión Europea en la Orden de Detención Europea, tiene por objeto la eliminación de las formalidades de extradición y la adopción del principio de reconocimiento recíproco de las sentencias penales.

La extradición presupone que la persona buscada va a ser enjuiciada; si es buscada simplemente para que comparezca como testigo, el asunto debe resolverse mediante una comisión rogatoria y no mediante la extradición.

En la Orden de Detención Europea no existe la fase administrativa de la extradición, es un procedimiento exclusivamente judicial, y no es necesario verificar la doble incriminación o tipificación para ejecutar la orden, en relación con una lista de 32 categorías de infracción establecidas por la Decisión Marco.

Este mecanismo de la Orden de Detención Europea está basado en un alto nivel de confianza (en los sistemas judiciales) entre los Estados miembros, cuestión que aún no ha sido superada entre los países de América Latina, por el contrario, las diferencias entre las disposiciones de las respectivas legislaciones internas son evidentes.

Es importante señalar que la denegación de una ejecución de la Orden de Detención Europea debe justificarse, mientras que en los Convenios y Tratados firmados y ratificados por Nicaragua no establecen dicha obligación en cuanto a la denegación de una extradición.

En relación a la entrega de la persona por causa de una Orden de Detención Europea, se hará a más tardar 10 días después de la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden. Este plazo tal y como lo señala el Código Procesal Penal y los convenios y tratados ratificados por Nicaragua es de 60 días a partir de la emisión de la solicitud de extradición.

El proceso administrativo para la repatriación o deportación de una persona que ingresa de forma ilegal a Nicaragua se encuentra regulado en las reformas e incorporaciones a la Ley No. 240 Ley de Control del Tráfico de Migrantes la que señala que las personas que ingresen y/o permanezcan de forma ilegal en el territorio nacional, serán retenidas por la autoridad competente durante un plazo

de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la fecha de su retención, las formas o modalidades a las que se refiere son las siguientes:³²

1. Cuando haya ingresado al país por lugar no habilitado como puesto fronterizo.
2. Cuando ingrese sin someterse a control migratorio.
3. Cuando el pasaporte o la visa que presenta son falsificados u obtenidos fraudulentamente.
4. Cuando se le vence la visa de estadía o de permanencia en el país, salvo lo dispuesto en el artículo 2 de esta Ley.

“Los migrantes ilegales serán retenidos en un local designado como Centro Nacional de Retención de Migrantes Ilegales bajo la administración y custodia de las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería, debiéndose adoptar las normas y medidas de seguridad pertinentes hasta la deportación a su país de origen o procedencia, una vez que hayan sido documentados por el Consulado de su respectivo país y que hayan obtenido su boleto de retorno, serán embarcados bajo la custodia de las autoridades de Migración y Extranjería.

En los casos de los migrantes ilegales cuyo país tenga representación diplomática o consular, serán puestos en conocimiento de su respectiva Embajada o Consulado, a fin de que éstos en las cuarenta y ochos horas posteriores, inicien el proceso de repatriación de sus con-nacionales. Si los migrantes ilegales estuviesen en capacidad de pagar el costo del boleto para su repatriación o deportación inmediata, ésta se efectuará en las subsiguientes cuarenta y ocho horas después de su captura y retención o antes.

³² Art. 5 Ley No. 240 Ley de Control del Tráfico de Migrantes Publicado en la Gaceta No.220 del 20 de noviembre de 1996.

Si no existiera en el territorio nacional representación diplomática del país de origen, le corresponde a las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería proceder a la deportación de los migrantes ilegales en un plazo de treinta días hábiles, período durante el cual permanecerán en el Centro Nacional de Retención de Migrantes Ilegales.

Las personas extranjeras que hayan sido repatriadas, o deportadas, o expulsadas por las autoridades nicaragüenses o por sus representaciones diplomáticas o consulares, no podrán ingresar a Nicaragua durante un período de veinticuatro meses, plazo que se contará a partir de la fecha de la repatriación, deportación, o de la expulsión; si los deportados o repatriados retornan antes del plazo previsto, se les detendrá y serán procesados por la comisión del delito de ingreso y/o permanencia ilegal en el país y se les aplicará la pena de tres meses de privación de libertad.

Cuando se trate de extranjeros, que además de haber cometido el delito de ingreso y/o permanencia ilegal en el país, hayan sido capturados por haber cometido otros delitos comunes en el territorio nacional, la expulsión o la repatriación no será procedente sino hasta el cumplimiento de la pena impuesta por la comisión del otro ilícito y la pena propia por la comisión del delito de ingreso y/o permanencia ilegal en el territorio nacional”³³.

Podemos decir que la aplicación estricta de las leyes sobre migración, especialmente la deportación de los fugitivos, se convierte en una forma de agilizar la aplicación de la ley, lo que significa una alternativa jurídica para evitar que los delitos queden impunes, en caso de que no proceda la extradición.

También es importante señalar que en los casos en que existiera una solicitud de extradición pasiva y a la vez existiera una orden de deportación debería de optarse

³³ Art. 20 Ley No. 240 Ley de Control del Tráfico de Migrantes Publicado en la Gaceta, Diario oficial No.220 del 20 de noviembre de 1996

por llevarse a efecto el trámite de extradición, esto porque si bien es cierto la deportación es una medida alterna pero de carácter administrativo mientras que la extradición es de carácter jurídico por ende ésta debe de prevalecer.

En cuanto a lo que se refiere al traslado figura que es utilizada en convenios y tratados sobre la ejecución de condenas en el extranjero, Nicaragua ha suscrito y ratificado convenios internacionales en este sentido (Convenio entre la República de Nicaragua y El Reino de España para el Cumplimiento de Condenas Penales, Tratado entre El Gobierno de la República de Nicaragua y El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre Ejecución de Sentencias Penales entre otros), pues el traslado se diferencia de la extradición en cuanto este tiene como objetivo principal la readaptación de los reos a la vida social después de haber adquirido una buena conducta y haber realizado actividades dentro de los centros de reclusión, es darles a los nacionales que se encuentran privados de libertad en el extranjero, cumpliendo una condena por un delito, la posibilidad de cumplir esa condena en su propio país.

VII. Clases de extradición

7.1. Extradición activa

La extradición activa se define desde la perspectiva del Estado que demanda o requiere al delincuente.

"Se dice que la extradición es activa cuando un Estado requiere la entrega de un delincuente a otro Estado donde reside³⁴.

³⁴ Gallino Yanzi, *op. cit.*, p. 686 C. V. *Extradición*, En Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XI Esta-Fami, Diskril S. A., Buenos Aires, 1977.

Se ha señalado, con acierto, que el carácter de la extradición activa es administrativo y político; se trata de la demanda por voluntad política de un Estado para que se le entregue a un fugitivo con el propósito de no dejar impune un delito. Esa demanda supone un procedimiento y una serie de requisitos administrativos con los que debe cumplirse para que la extradición se haga efectiva³⁵.

7.2. *Extradición pasiva*

La extradición pasiva, por el contrario, se define desde la perspectiva del Estado al que se demanda o al que se requiere la entrega del delincuente.

"...pasiva es aquella en que el Estado requerido que lo tiene en su poder lo entrega para su juzgamiento o el cumplimiento de una condena"³⁶.

El carácter de la extradición pasiva, también en contraste con la anterior, es eminentemente jurídico y jurisdiccional. Se trata de establecer, para el caso concreto, si de conformidad con las normas vigentes procede acceder a la demanda recibida. Los problemas que suscita la extradición, por ser de carácter jurídico y jurisdiccional, se refieren a esta forma pasiva.

7.3. *Extradición voluntaria*

En esta modalidad de extradición se presenta el caso de que el requerido, por si, renunciando a todas las formalidades legalmente previstas, consiente voluntariamente su entrega.

³⁵ Jiménez de Asúa, *op. cit.*, T. II, p. 888 L. *Tratado de Derecho Penal* Editorial Losada S. A., Buenos Aires, 1964.

³⁶ Gallino Yanzi, *op. cit.*, p. 686 C. V. *Extradición*, En Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XI Esta-Fami, Diskril S. A., Buenos Aires, 1977.

"... la extradición es voluntaria cuando el individuo reclamado se entrega, a petición suya, sin formalidades"³⁷.

"Identificado el detenido, el juez le invitará a que manifieste, con expresión de sus razones, si consiente en la extradición o intenta oponerse a ella; si consintiere y no se suscitaren obstáculos legales que a ello se opongan, el Juez podrá acceder, desde luego, a la demanda de extradición"³⁸.

7.4. *Extradición en tránsito*

Los componentes de esta modalidad de extradición son:

- a) necesidad de transitar con el extraditado por territorio de un tercer Estado, distinto al que demandó su entrega y distinto al Estado que lo entregó;
- b) Eliminación de formalidades, bastando para que la extradición en tránsito se concrete, la exhibición del original o copia auténtica del acuerdo que otorgó la extradición.

Jiménez de Asúa sintetiza este concepto así:

"Existe extradición en tránsito cuando los individuos, cuya extradición ha sido concedida por el Estado requerido al país demandante, son conducidos en detención por el territorio de un tercer Estado o son llevados en buques o aeronaves bajo pabellón de este país"³⁹.

³⁷ Jiménez de Asúa, *Tratado de Derecho Penal* Editorial Losada S. A., Buenos Aires, 1964. T. II, p.888

³⁸ Rodríguez Devesa, J. M. *Derecho Penal Español, Parte General*, Editorial Dyknsen, Madrid, 1985. p. 241, nota 12.

³⁹ Jiménez de Asúa, *Tratado de Derecho Penal* Editorial Losada S. A., Buenos Aires, 1964. T. II, p.888

7.5. *La reextradición*

Jiménez de Asúa resume este supuesto en los siguientes términos:

"Puede acontecer que el individuo cuya extradición se obtiene del Estado de refugio, sea reclamado al Estado en que se le persigue judicialmente, por una tercera potencia, a causa de un delito anterior a aquel por el que ha sido entregado."

La doctrina coincide en señalar que, la autorización de la reextradición, debe ser otorgada por el país que originalmente sirvió de refugio al perseguido y concedió su primera extradición.

"Si después de verificada la entrega de un reo a un Estado, sobreviene respecto del mismo individuo un nuevo pedido de extradición de parte de otro Estado, corresponderá acceder o no al nuevo pedido a la misma nación que verificó la primera entrega, siempre que el reclamado no hubiere sido puesto en libertad"⁴⁰.

7.6. *Ampliación de extradición*

Es la que permite a la autoridad judicial competente del Estado requirente poder juzgar al extraditable por hechos distintos de los que motivaron la primera petición de extradición, previo consentimiento del estado requerido. La ampliación puede concederse tanto en el supuesto de que el extraditado se encuentre en el Estado requerido por no haberse ejecutado aún la extradición, bien por tener responsabilidad pendientes o por otra causa, como en el caso de que ya hubiera sido ejecutada la extradición.

⁴⁰ Citado por Jiménez de Asúa, *Tratado de Derecho Penal* Editorial Losada S. A., Buenos Aires, 1964. T. II, p. 889

VIII. El Procedimiento

Como ya lo hemos señalado la extradición nace como un acto político entre soberanos y ha evolucionado hasta convertirse en una institución jurídica. En la actualidad, la mayor parte de los sistemas que siguen los estados en el procedimiento de extradición tienen todavía resabios de ese origen, que se centran en un elemento político fundamental: el de concebir a la extradición como un acto de soberanía.

El elemento político de la extradición ha sido, un elemento indiscutible, presente siempre que se trata un asunto de esta naturaleza; sin embargo, el avance en la interpretación del derecho y el auge que ha tomado el Derecho Internacional Humanitario, han permitido que la extradición sea una institución de derecho público, un acto jurídico que no sólo se encuentra establecido dentro del ordenamiento constitucional tal y como lo establece el artículo 43 de la Constitución Política de Nicaragua, sino también por los diversos convenios internacionales celebrados entre los estados partes.

La extradición⁴¹ es considerada como un acto jurídico, que se relaciona estrechamente con tres grandes campos del Derecho: el internacional, el penal y el procesal; pero particularmente en nuestros días, la extradición interesa al ámbito del derecho constitucional, pues tiene que ver con la forma en que los Tratados Internacionales son asimilados al derecho interno, con el cómo los procedimientos de “adopción o adaptación” de esos tratados se convierten en procedimientos de producción del derecho dentro del sistema estatal, así lo establece en el artículo 138 numeral 11 de la Constitución Política de Nicaragua.

⁴¹ Participación de la Señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en El XIII Simposium Internacional de Derecho “Tendencias Jurídicas del Siglo XXI”, Organizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 19 de Octubre de 2001. www2.scjn.gob.mx/Ministros/.../EXTRADICION.%20ITESM.pdf, consultado el 11 de Noviembre de 2009.

Desde el punto de vista del Derecho Internacional, la figura de la extradición, se establece como un acto por medio del cual se relacionan dos Estados a través de sus órganos competentes, generándose así derechos y obligaciones para aquellos. Lo que significa que, cuando se de cumplimiento a las condiciones previstas en los ordenamientos respectivos (leyes, tratados, convenciones, entre otros), la extradición constituirá un derecho para el Estado requirente y una obligación para el Estado requerido.

Desde el punto de vista jurídico-procesal, la extradición se percibe como un acto de auxilio judicial de índole internacional, esto es, un trámite que va encaminado a facilitar la labor judicial del juez del territorio o de la nacionalidad del delincuente.

Desde el punto de vista penal, la institución de la extradición, “es una consecuencia del *ius puniendi* propio o ajeno, o una prórroga de la ley penal con carácter extraterritorial”. El Derecho Penal tiene entre sus propósitos la definición de los delitos y la fijación de las sanciones y, por ello, en el momento de actualizarse determinada conducta que encuadre en el tipo penal, el Derecho Penal procura que aquella sea debidamente sancionada, no importando que ésta se haya cometido fuera del territorio en el que rige dicha normatividad penal.

El Derecho Constitucional establece a la extradición como una figura que tiene que ver con muchas de las normas y principios que en la Constitución se establecen. Asimismo, la extradición se concede por dos efectos esenciales para procesamiento o ejecución de condena.

De esta forma la extradición tendrá lugar en los términos y condiciones que establecen la Constitución Política, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Nicaragua y lo contenido en el Código Penal de Nicaragua⁴².

8.1. *Procedimiento administrativo*

La doctrina establece tres categorías a través de las cuales se puede solicitar extradición, las que se clasifican de la siguiente manera: Sistema administrativo, sistema exclusivamente judicial y sistema mixto.

“El primer sistema administrativo seguido todavía en algunos estados y adoptado en Francia hasta la entrada en vigencia de la Ley del 10 de Marzo de 1927, la extradición se admite o se deniega por autoridad gubernativa, sin que tenga lugar el poder judicial. De esta manera falta para el individuo contra quien se pide la extradición, toda garantía para que este procedimiento se siga con la observancia de las normas prescritas, tales como resultan de las leyes internas de los tratados y de las costumbres internacionales.

El segundo sistema exclusivamente judicial se practica especialmente en Inglaterra, donde el Ministro de Estado, si no encuentra la demanda de extradición del toda infundada, la trasmite al Magistrado competente, ante el cual tiene un verdadero y propio proceso, con las garantías de la oralidad, de la publicidad, de la defensa, y de la apelación, como si se tratara de un autor de un delito cometido en Inglaterra. Si la autoridad judicial no se pronuncia en sentido favorable a la extradición, ésta no puede tener lugar y la extradición no se juzga admisible si el Estado extranjero requirente no proporciona pruebas suficientes de la culpabilidad del individuo que ha de entregarse. De esta manera la extradición se hace muy difícil y se desplazan las naturales competencias; en cuanto al juicio de mérito sobre

⁴² Artículo 17 Ley No. 641 Código Penal, Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nos. 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7, 8 y 9 de Mayo del 2008.

la culpabilidad del acusado, corresponde exclusivamente a las autoridades del Estado requirente”.

El tercer sistema mixto se adopta en varios Estados, con notables diferencias entre un país y otro. Según la Ley Belga de 15 de marzo de 1874 y la Holandesa del 6 de Abril de 1875, la autoridad judicial está llamada a dar su propio parecer sobre la regularidad de la demanda de extradición, sin ocuparse de la culpabilidad del imputado, realizándose un debate público al que concurre el Ministerio Fiscal y un defensor del interesado si éste lo solicita. Sin embargo, se trata de un sistema que nos es suficientemente liberal, en cuanto al parecer de la autoridad judicial tiene para el gobierno simple valor consultivo y no obligatorio. Es preferible el sistema de la Ley Suiza de 22 de Enero de 1892, según la cual la extradición del individuo reclamado tiene lugar, sin más, si él no se opone, pero si contra la admisibilidad de tal procedimiento interpone alguna excepción fundada en la Ley Suiza o en un tratado de extradición, o en una declaración de reciprocidad, la misión de decidir corresponde al Tribunal Federal, que, después de un debate legal, pronuncia su decisión obligatoria para la autoridad gubernativa”⁴³.

De los anteriores sistemas, el que es utilizado en nuestro país, es el sistema mixto ya que la vía por la cual se hace una solicitud en el caso de extradición pasiva, es a través, del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual la remite al Ministerio Público y éste a su vez de conformidad con el artículo 353 del Código Procesal Penal, remite la solicitud de extradición pasiva a la Sala de lo Penal de Corte Suprema de Justicia y es a ésta última a quien le corresponde decidir si da o no lugar a la extradición. Para el caso de la solicitud de extradición activa el Ministerio Público solicita a la Sala de lo Penal de Corte Suprema de Justicia, se declare procedente la solicitud de extradición activa adjuntando el Expediente con los requisitos establecidos en el Convenio por el cual se requiere dicha solicitud,

⁴³ Gaete González Eugenio, *La Extradición ante la Doctrina y la Jurisprudencia*, 1935-1965, Escuela de Derecho de Valparaíso, Editorial Jurídica de Chile, 1972, pág 27-28.

posteriormente la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia remite al Ministerio Público la solicitud con un auto en el que da o no ha lugar a la misma y es el Ministerio Público a quien le corresponde remitir al Ministerio de Relaciones Exteriores la solicitud de extradición pasiva con el auto emitido por la Sala de lo Penal de Corte Suprema de Justicia para que ésta lo remita al país requerido.

8.2 *Del procedimiento para la extradición*

Para que proceda la extradición en Nicaragua es necesario que⁴⁴:

- a) El hecho que la motiva constituya delito en el Estado reclamante y también en Nicaragua;
- b) No haya prescrito la acción penal ni la pena en ninguno de los dos países;
- c) El reclamado no esté sometido a juicio ni haya sido juzgado por el mismo hecho por los tribunales de la República;
- d) No se trate de delito político o común conexo con él, según calificación nicaragüense;
- e) El delito perseguido esté sancionado por la ley nicaragüense con una pena no menor de un año de privación de libertad;
- f) El Estado reclamante garantice que la persona reclamada no comparecerá ante un tribunal o juzgado de excepción, no será ejecutada ni sometida a penas que atenten contra su integridad corporal ni a tratos inhumanos ni degradantes;
- g) No se haya concedido al reclamado la condición de asilado o refugiado político;
- h) El reclamado no esté siendo juzgado o haya sido condenado por delitos cometidos en Nicaragua, con anterioridad a la solicitud de extradición. No

⁴⁴ Artículo 18 Ley No. 641 Código Penal, Publicada en La Gaceta, Diario oficial Nos. 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7, 8 y 9 de Mayo del 2008.

obstante si es declarado no culpable o ha cumplido su pena, podrá decretarse la extradición;

- i) El delito haya sido cometido en el territorio del Estado reclamante o producido sus efectos en él.

El procedimiento que debe seguirse de acuerdo con lo preceptuado por el Código de Procedimiento Penal es el siguiente:

A falta de tratado o convenio suscrito y ratificado soberanamente por Nicaragua, las condiciones, el procedimiento y los efectos de la extradición estarán determinados por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal, que se aplicará también a los aspectos que no hayan sido previstos por el tratado o convenio respectivo⁴⁵.

La facultad de conceder o denegar la extradición corresponde a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero las decisiones que ésta tome se pondrán en conocimiento del Estado requirente o requerido por medio del Poder Ejecutivo. En este último caso, se acompañarán los mismos documentos y se llenarán los mismos trámites que exige esta Ley para todo país que los solicite⁴⁶.

La extradición es activa o pasiva y alcanza a procesados y condenados como autores, cómplices o partícipes de delitos cometido dentro o fuera del territorio nacional. Los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional⁴⁷.

⁴⁵ Artículo 348 Ley No. 406 Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 243 y 244 del 21 y 24 de Diciembre del 2001

⁴⁶ Artículo 350 Ley No. 406 Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 243 y 244 del 21 y 24 de Diciembre del 2001.

⁴⁷ Artículo 349 Ley No. 406 Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 243 y 244 del 21 y 24 de Diciembre del 2001.

Aún cuando la doctrina establece diversos tipos de extradición (Extradición Voluntaria extradición en tránsito y la reextradición), el Código Procesal Penal de Nicaragua solamente establece la extradición activa y la extradición pasiva como veremos a continuación.

8.3 *Extradición activa*

Cuando se tenga noticia de que se encuentra en otro Estado una persona contra la cual el Ministerio Público haya presentado acusación y el juez competente haya dictado una medida cautelar de privación de libertad, o se trata de una persona que deba descontar una pena privativa de libertad, la Fiscalía General de la República interpondrá solicitud de extradición ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia con copia de las actuaciones en que se funda⁴⁸.

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro del plazo de treinta días contados a partir del recibo de la documentación pertinente, declarará si es procedente o no solicitar la extradición y, en caso afirmativo, remitirá lo actuado a la Fiscalía General, adjuntando toda la documentación necesaria y exigida en el país requerido para tales efectos.

Dicha atribución es otorgada a la Corte Suprema de Justicia como precepto constitucional en el artículo 164 numeral 6 donde se le faculta para resolver sobre las solicitudes de extradición de ciudadanos de otros países y denegar las de los nacionales.

En relación a las medidas cautelares y su tramitación se establece en el Código Procesal Penal que el Poder Ejecutivo podrá requerir al Estado donde se encuentra la persona solicitada su detención preventiva y la retención de los objetos

⁴⁸Artículo 351 Ley No. 406 Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 243 y 244 del 21 y 24 de Diciembre del 2001.

concernientes al delito, con fundamento en la solicitud formulada por el Ministerio Público.

El Ministerio de Relaciones Exteriores certificará y hará las traducciones cuando corresponda, y presentará la solicitud ante el Estado extranjero en el plazo máximo de sesenta días.⁴⁹

8.4 *Extradición Pasiva*

Si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se halle en territorio nicaragüense, la Fiscalía General de la República remitirá la solicitud a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia con la documentación recibida.⁵⁰

El Código Penal establece de la siguiente manera el trámite que se debe seguir cuando la extradición sea solicitada⁵¹:

1. El requerido será puesto a la orden de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, la que le designará defensor público o de oficio al imputado si no lo tiene;
2. Mientras se tramita la extradición, el imputado podrá ser detenido preventivamente hasta por el término de dos meses;
3. El Estado requirente deberá presentar;
 - a) los datos de identificación del imputado o reo
 - b) Documentos comprobatorios de un mandamiento o auto de detención o prisión judicial o, en su caso, la sentencia condenatoria firme pronunciada;

⁴⁹ Art.352 Ley No. 406 Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 243 y 244 del 21 y 24 de Diciembre del 2001.

⁵⁰ Art. 353 Ley No. 406 Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 243 y 244 del 21 y 24 de Diciembre del 2001.

⁵¹ Art. 356 Ley No. 406 Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 243 y 244 del 21 y 24 de Diciembre del 2001.

- c) Copia auténtica de las actuaciones del proceso, que suministren prueba o al menos indicios razonables de la culpabilidad de la persona de que se trata, y.
- d) Copia auténtica de las disposiciones legales sobre calificación del hecho, participación atribuida al infractor, precisión de la pena aplicable y sobre la prescripción.

Las copias auténticas a que hace referencia este artículo, deberán ser presentadas con las formalidades exigidas por la legislación común. Si la documentación es presentada sin observar estas formalidades o está incompleta, el tribunal solicitará por la vía más rápida los documentos que falten.

- 4) Terminado ese trámite, se dará audiencia al imputado, su defensor y el Ministerio Público hasta por veinte días, de los cuales diez días serán para proponer pruebas y los restantes para evacuarla.
- 5) Los incidentes que se promuevan durante la sustanciación de las diligencias, serán decididos por la Sala, la que desechará de plano toda gestión que no sea pertinente o que tienda, a su juicio, a entorpecer el curso de los procedimientos.
- 6) Dictará resolución concediendo o negando la extradición dentro de los diez días siguientes a los plazos indicados anteriormente y podrá condicionarlo en la forma que considere oportuna. En todo caso, deberá solicitar y obtener del país requirente, promesa formal de que el extraditado no será juzgado por un hecho anterior diverso ni sometido a sanciones distintas a las correspondientes al hecho o de las impuestas en la condena respectiva, copia de la cual el país requirente remitirá a nuestros tribunales.
- 7) De lo resuelto por la Sala de lo Penal cabe recurso de reposición dentro del término de tres días que comenzarán a correr al día siguiente de la notificación.

Concurso de solicitudes de extradición⁵² en el caso de que dos o más Estados reclaman a un mismo individuo en razón de distintas infracciones, se dará preferencia al hecho más grave conforme a la ley nacional; si son de igual gravedad, tendrán preferencia los Estados con los cuales exista tratado o convenio de extradición.

Si las distintas reclamaciones se hacen por un mismo hecho, se preferirá la del Estado donde se cometió éste y, en todo caso, la del país del que sea súbdito o ciudadano el reo, sin perjuicio de la regla precedente relativa a convenios.

La extradición informal urgente⁵³ se puede solicitar por cualquier medio de comunicación, siempre que exista orden de detención contra el acusado y la promesa del requirente de cumplir con los requisitos señalados para el trámite.

En este caso los documentos de que habla el artículo siguiente se deberán presentar ante la Embajada o Consulado de la República, a más tardar dentro de los siguientes diez días contados a partir de la detención del acusado. Se deberá dar cuenta de inmediato a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y remitirle la documentación a fin de que conozca y resuelva.

Si no se cumple con lo aquí ordenado, el detenido será puesto en libertad y no podrá solicitarse nuevamente su extradición por este procedimiento sumario.

Cuando la extradición sea denegada, el reo será puesto en libertad; si se concede, será puesto a la orden del Ministerio Público y de la Policía Nacional, para su entrega. Esta deberá hacerse conjuntamente con los objetos que se hayan encontrado en su poder o sean producto del hecho imputado, lo mismo quede las

⁵² Art. 354 Ley No. 406 Ley No. 406 Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 243 y 244 del 21 y 24 de Diciembre del 2001.

⁵³ Art.355 Ley No. 406 Ley No. 406 Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 243 y 244 del 21 y 24 de Diciembre del 2001.

piezas que puedan servir para su prueba, siempre que ello no perjudique a terceros⁵⁴.

Una vez puesto a la orden del Estado requirente el imputado o reo si éste no dispone del mismo dentro de los dos meses siguientes de haber quedado a sus órdenes, será puesto en libertad.⁵⁵

Negada la extradición de una persona por el fondo, no se puede volver a solicitar por el mismo delito, es decir que pasa a ser cosa juzgada⁵⁶.

En relación con los gastos de detención y entrega el Código Procesal Penal establece en su artículo 360 que será por cuenta del Estado requirente.

Si embargo, no debemos obviar que aun cuando el procedimiento de extradición⁵⁷ implica una serie de actos y formalidades que no deben de lesionar la soberanía de los países, existen técnicas de detención fuera del marco de la extradición, que se pueden resumir en tres categorías:

- ❖ El secuestro de una persona por parte de agentes de un Estado. Es la que se emplea con más frecuencia, aunque cumple con el objetivo de entregar a la persona, con o sin su consentimiento, es unilateral y su proceso se considera ilegal.
- ❖ La entrega informal de una persona por agentes de un Estado a otro Estado, sin seguir el proceso legal y formal requerido.

⁵⁴ Art. 357 Ley No. 406 Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 243 y 244 del 21 y 24 de Diciembre del 2001.

⁵⁵ Art.358 Ley No. 406 Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 243 y 244 del 21 y 24 de Diciembre del 2001.

⁵⁶ Art. 359 Ley No. 406 Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 243 y 244 del 21 y 24 de Diciembre del 2001.

⁵⁷ Jiménez Becerra, Héctor Daniel. El Procedimiento de Extradición, Primera Parte, Universidad Panamericana, Facultad de Derecho (coautor corporativo), México, Facultad de Derecho, 2000.

- ❖ El uso de las leyes de migración, cómo un método para que se entregue a una persona o se le coloque en un lugar en el cual él o ella, pueden ser tomados en custodia por agentes de otro estado.

Estas técnicas tienen su origen, según Alonso Gómez – Robledo, por la aplicación inapropiada de la máxima *mala captus bene detentus* (incorrectamente capturado, pero bien detenido), cuando tribunales locales se adjudican jurisdicción, sin importar las formas en que la persona fue detenida.

IX. La extradición a través de los tratados

El Principio rector de los tratados de extradición es el de *pacta sunt servando*⁵⁸, que significa “lo estipulado por las partes cualquiera sea la forma de estipulación, debe ser fielmente cumplido, o sea que se ha de estar a lo pactado”.

La extradición, en sentido amplio, como acuerdo de cooperación entre los Estados, se ubica dentro del ámbito del derecho internacional y esto quiere decir que las condiciones y requisitos no pueden ser reglamentados unilateralmente por cada estado, y que la decisión, ya sea de solicitarla o de otorgarla, viene a enmarcarse dentro de la competencia del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, es cierto que si se considera al mismo tiempo el proceso de extradición como un medio jurídico - un camino legal – que pueda, menoscabar las libertades individuales, la extradición en este sentido debe obviamente ser organizada por la ley interna y ponerse en práctica a través de la autoridad judicial del Estado competente.

⁵⁸ Este principio entra por primera vez en el derecho neo romanista codificado a través de Codex Maximilianus Bavaricus civiles de 1756 en el Código Civil de Baviera Obra de Kreit Mayr, Enciclopedia Jurídica OMEBA, Buenos Aires, Argentina, Editorial Bibliografica, 1964, pág. 237.

De lo anterior surge evidentemente, una partición de competencias, en muchos aspectos con rasgos ambiguos e inciertos, generados entre el derecho y la ley interna y luego además en cuanto al procedimiento entre la autoridad administrativa, y la autoridad judicial.

El derecho a la extradición, como institución jurídica, por la cual se entrega al Estado requirente al supuesto responsable o inculpado, que se encuentra en el territorio de un tercer estado, va a ser el resultado de la puesta en marcha de un acuerdo internacional (concertado con antelación o en el momento preciso); un acuerdo concertado precisamente para alcanzar dicho fin, y por lo tanto sometido a reglas jurídicas precisas, cuya eventual inobservancia estará sancionada por la nulidad interna, y por la responsabilidad internacional.

Desde los tiempos del derecho internacional clásico, ha existido una cuasi-unanimidad de criterio en el sentido que el Estado en cuyo territorio se encontraba “el delincuente”, tenía la obligación de extraditarlo (con numerosas excepciones), o bien de sancionarlo o de someterlo a juicio y probablemente con mayor precisión, la obligación de perseguir al delincuente.

Los estados soberanos ⁵⁹son los únicos que tienen la capacidad de celebrar tratados en consecuencia únicamente entre iguales se puede pactar derechos y obligaciones. Los tratados son contratos, esto es así porque “Con el termino “contrato” se designa un estado de hecho del orden jurídico interno”. Pero el mismo estado de hecho existe igualmente - bajo el nombre de “tratado”- en el derecho internacional. En ambos casos se plantean, en principio, los mismos problemas.

De acuerdo a la definición de tradicional, convención (contrato) es la concordancia de voluntades de dos o varios sujetos, tendientes a producir un efecto jurídico, es

⁵⁹ ADATO GREEN, VICTORIA, El Papel del Derecho Internacional en América, La soberanía nacional en la era de la integración II Extradición, Algunos Principios que Rigen la Extradición, Universidad Autónoma, Ciudad Universitaria, D.F., México, Primera Edición 1997.

decir, a crear o extinguir una obligación y el derecho subjetivo correspondiente. Si la teoría tradicional no ve en la convención (contrato) sino un acto jurídico es porque la considera solamente desde el ángulo visual de la aplicación del derecho y la ejecución de las normas. Al concluir una convención (contrato), los sujetos aplican una regla del derecho – la regla *pacta sunt servando*- a una situación concreta y se sirven de ella para regular sus relaciones recíprocas.

Si bien es cierto que por los tratados los Estados se comprometen a la entrega, lo que no significa que renuncien a su soberanía puesto que les corresponden analizar las causales, documentación presentada, invocaciones del extraditabile, y pueden denegar el pedido de extradición en razón de su libertad de decisión.

El Derecho Internacional de extradición está basado en tratados bilaterales o multilaterales cuyas principales líneas se pueden definir de la siguiente forma:

- 1) Enumeración de delitos que dan lugar a la extradición que ha estado siempre bien definida, como también lo ha estado la naturaleza de tales delitos, específicamente determinados en los tratados de extradición.
- 2) La persona extraditada sólo puede ser juzgada por el delito o delitos por los que su extradición haya sido concedida, y no por ningún otro, a menos que consienta en ello el extraditado.
- 3) La nacionalidad del extraditado es una circunstancia verdaderamente importante. La norma general de los Gobiernos es la de denegar la extradición de sus nacionales y conceder la de los extranjeros, siempre de conformidad con las leyes vigentes. En los supuestos de denegación de la extradición de los propios nacionales siempre cabe la posibilidad de que sea enjuiciado el presunto delincuente en su país, para lo que será necesario que las autoridades judiciales del país requirente envíen a las del requerido los elementos de prueba necesarios para proceder al ejercicio de la acción penal.

- 4) En caso de urgencia está prevista la detención preventiva del reclamado, para lo que bastará el envío por parte del país requirente de un aviso transmitido, bien utilizaron la vía INTERPOL, o la vía diplomática debiendo estarse entonces a lo que disponga el convenios corresponderte o la ley, en cuanto al contenido de la petición, debiendo enviarse acto seguido la correspondiente comunicación en regla por la vía diplomática.
- 5) Tanto el plazo de detención preventiva, como el de presentación de documentos por la vía diplomática está establecido en los tratados o en el Código de Procedimiento Penal, en defecto a falta de aquellos.
- 6) Para el análisis de la solicitud de extradición por parte de las autoridades judiciales en el caso de Nicaragua la Corte Suprema de Justicia del Estado requerido es indispensable que las del estado requirente presenten testimonio de la sentencia condenatoria o mandamiento de prisión, o cualquier otra providencia que tenga la misma fuerza, a la que se acompañarán las circunstancias del delito y cuantos datos personales se posean sobre el reclamado.
- 7) El delito que motiva la demanda ha de estar incluido en el convenio firmado por los Estados requirente y requerido; y si no existiere, darse la doble incriminación, o que se formule mediante canje de nota la promesa formal de reciprocidad.
- 8) La ejecución de la extradición queda suspendida a que el extraditado cumpla con las responsabilidades en que hubiera incurrido en el país requerido.
- 9) Normalmente, para la concesión de la extradición los tratados señalan el tiempo mínimo de prisión a que debe ser condenado el extraditado por el delito objeto de la demanda.
- 10) Le corresponde a los Tribunales o Magistrados (como es el caso de Nicaragua) conocer del procedimiento de extradición al que le está

reservado el derecho de averiguar si procede o no, el que un Estado solicite la extradición, si se han observado las formalidades prescritas y el poder de indagar sobre la identidad del detenido y del hecho derivado del principio de que un Estado no puede renunciar a la aplicación de la jurisdicción como atributo de soberanía, y si el delito está comprendido dentro del repertorio de los enumerados en el tratado vigente entre ambos Estados, requirente y requerido, pero en ningún caso indagar sobre si la persona reclamada es sospechosa o culpable del delito de que está acusada ya que esto implicaría una ilegítima intromisión del Estado requerido en la esfera de la soberanía del Estado requirente, bastando la existencia de indicios de criminalidad reflejados en los documentos enviados para que el tribunal se pronuncie sobre la convivencia o no de acceder a la extradición solicitada.

En ese sentido Nicaragua ha suscrito y ratificado los siguientes tratados y convenios ⁶⁰ bilaterales y multilaterales:

- 1) Tratado de extradición entre Nicaragua y Costa Rica, suscrito en San José, Costa Rica, en fecha 8 de noviembre de 1893. Canje de ratificaciones hecho en Managua el 7 de septiembre de 1896.
- 2) Tratado de extradición de criminales entre Nicaragua y Bélgica, suscrito en Guatemala, en fecha 5 de noviembre de 1904. Canje de ratificaciones hecho en Guatemala el 21 de marzo de 1907.
- 3) Tratado de extradición de Criminales entre Nicaragua y los Estados Unidos de América, suscrito en Washington, D.C., E.E.U.U., en fecha 1 de marzo de 1905. Canje de ratificaciones hecho en Washington, D.C. el 14 de junio de 1907.

⁶⁰Instrumentos Jurídicos Internacionales suscritos por Nicaragua, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Soberanía y Territorio / MINREX, 5 de febrero de 2008.

- 4) Tratado de extradición de criminales fugitivos entre Nicaragua y el Reino Unido de la Gran Bretaña, suscrito en Managua, Nicaragua en fecha 19 de abril de 1905. Canje de ratificaciones hecho en Londres el 13 de febrero de 1906.
- 5) Tratado de extradición y protección contra el anarquismo, suscrito en la ciudad de México en fecha 28 de enero de 1902. Ratificado en fecha 12 de febrero de 1906.
- 6) Convención sobre Derecho Internacional Privado (Código de Bustamante), suscrito en la Habana, Cuba en fecha 20 de febrero de 1928. Ratificado en fecha 28 de febrero de 1928.
- 7) Tratado de extradición entre Nicaragua y Colombia, suscrito en Managua, Nicaragua en fecha 25 de marzo de 1929. Aprobado por el Congreso el 26 de marzo de 1930 y ratificado por el Ejecutivo el 20 de febrero de 1932. Gacetas No. 50 del 03/03/32 y No. 114 del 10/06/32.
- 8) Tratado de extradición de criminales fugitivos entre Nicaragua y Las Bahamas. Hecho por intercambio de notas: Nassau, Bahamas en fecha 7 de marzo y Managua, Nicaragua en fecha 6 de mayo de 1978. Vigente a partir de la fecha de la nota de respuesta (06/05/78). El tratado de extradición con Reino Unido será aplicable con Las Bahamas.
- 9) Tratado de extradición entre Nicaragua y México, suscrito en Managua, Nicaragua, en fecha 13 de febrero de 1993. Aprobado por Decreto A.N. 1888. Gaceta, Diario oficial No. 64 del 2 de abril de 1998. Ratificado por Decreto 29-98. Gaceta, Diario oficial No. 82 del 6 de mayo de 1998. Texto: Gaceta, Diario oficial No. 96 del 26 de mayo de 1998.
- 10) Tratado de extradición y asistencia jurídica en materia penal entre Nicaragua y Chile, suscrito en Santiago de Chile, en fecha 28 de diciembre de 1993. Aprobado por Decreto A.N. 1884. Gaceta, Diario oficial No. 63 del 1 de abril de 1998. Ratificado por Decreto 30-98. Gaceta, Diario oficial No. 82 del 6 de mayo de 1998. Instrumento de ratificación: Gaceta, Diario oficial No. 221 del 18 de noviembre de 1999.

- 11) Convención de extradición entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, suscrito en Washington, D.C., E.E.U.U. en fecha 7 de febrero de 1923. Depósito del Instrumento de ratificación: 15 de marzo de 1923 ante la ODECA.
- 12) Tratado de extradición entre Nicaragua y España, suscrito en Managua, Nicaragua, 12 de noviembre de 1997. Aprobado y ratificado por Decreto 70-2000. Gaceta, Diario oficial No. 161 del 25 de agosto de 2000.
- 13) Convención Interamericana sobre extradición, suscrito Caracas, Venezuela, en fecha 25 de febrero de 1981. Nicaragua la suscribió en esa misma fecha *pero no se ha ratificado*.
- 14) Convención Interamericana contra la corrupción, suscrita en Caracas, Venezuela, en fecha 29 de marzo de 1996. Aprobado por Decreto A.N. 2083. Gaceta, Diario oficial No. 227 del 25 de noviembre de 1998. Ratificado por Decreto 22-99. Gaceta, Diario oficial No. 47 del 9 de marzo de 1999. Instrumento de ratificación: Gaceta, Diario oficial No. 221 del 18 de noviembre de 1999. (Artículo 13 Extradición)
- 15) Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, suscrita en Viena, Austria, en fecha 20 de diciembre de 1988. Nicaragua la suscribió el 20 de diciembre de 1988. Aprobada por Decreto A.N. 61. Gaceta, Diario oficial No. 45 del 5 de marzo de 1990. Nicaragua comunicó su ratificación el 4 de mayo de 1990. (Artículo 6 Extradición)
- 16) Convención de Naciones Unidas sobre la delincuencia organizada transnacional, Suscrito en Nueva York, E.E.U.U., en fecha 15 de noviembre de 2000. Aprobado por Decreto A.N. 3246. Gaceta, Diario oficial No. 38 del 25 de febrero de 2002. Ratificado por Decreto 62-2002. Gaceta, Diario oficial No. 121 del 28 de junio de 2002. Depósito de ratificación: 9 de septiembre de 2002. (Artículo 16 Extradición)
- 17) Tratado Centroamericano Relativo a la Orden de Detención y Extradición Simplificada, Suscrito en la ciudad de León, Santiago de los Caballeros, República de Nicaragua, en fecha 2 de Diciembre de 2005. *No se ha ratificado*.

Si bien es cierto, Nicaragua ha suscrito y ratificado convenios y tratados en lo que hace a la extradición con algunos Estados con los que por su posición geográfica y por su relación internacional le son más cercanos, pero también es importante señalar que debido a la globalización, existen otros estados con los que aún no han suscrito convenios y tratados en este sentido, siendo que esto se hace necesario debido a que la delincuencia organizada comete cada vez con mayor frecuencia crímenes masivos, como el terrorismo, el tráfico de drogas ilícitas, trata de personas, el envenenamientos del medio ambiente entre otros, delito que son cometidos por organizaciones criminales internacionales que debido al tipo y al alcance de sus actividades cuentan con un amplio número de miembros, para los que las fronteras internacionales no significan nada, a no ser un medio favorable para escapar de la justicia.

Es importante tomar en cuenta también que “Generalmente se pone énfasis muy marcado en los procesos de elaboración, adopción y vigencia de un tratado; pero muy poco en su publicación conocimiento general, estudio y difusión. Nicaragua tampoco ha sido una excepción a este respecto”⁶¹. Esto porque en La Gaceta Diario Oficial en la mayoría de los casos sólo es publicado el nombre y la fecha en que se suscribió y se ratificó el Convenio o Tratado, lo que no permite a la ciudadanía en general contar con el contenido del texto para hacer uso de los mismo tal y como lo establece la Constitución Política de nuestro país.

También es importante que el Estado de Nicaragua a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Dirección General de Soberanía, Territorio y Asuntos Jurídicos Internacionales)⁶² tramite la aprobación de tratados y demás diligencias relativas a la entrada en vigor de los mismos, ya que en la lista antes citada de

⁶¹ Caldera Cardenal Norman, Ex Ministro de Relaciones Exteriores, Recopilación de Tratados Internacionales en Materia Penal, de los que Nicaragua es parte.

⁶² Art. 53 Decreto No. 118 – 2001 Reformas e incorporaciones al Reglamento de la Ley No. 290; Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo, Publicado en la Gaceta, Diario Oficial No. 48 del 8 de Marzo de 2001.

convenios y tratados de extradición se evidencia que no existe seguimiento a los mismo un ejemplo claro es la Convención Interamericana sobre extradición, suscrito en Caracas, Venezuela, en fecha 25 de febrero de 1981 en la que Nicaragua la suscribe en esa misma fecha y el Tratado Centroamericano Relativo a la Orden de Detención y Extradición Simplificada, suscrito en fecha 2 de Diciembre de 2005.

X. Extradiciones activas y pasivas tramitadas por el Ministerio Público de Nicaragua⁶³

10.1 Solicitudes de extradición pasivas

El Ministerio Público de Nicaragua a través de la Secretaría Ejecutiva de conformidad con lo establecido en el artículo 353 del Código Procesal Penal, ha remitido a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, doce solicitudes de extradición pasivas en el período comprendido del año 2003 al 2007, las que se detallan a continuación:

Año	País	Procesado	Delito	Observaciones
04-11-03	Estados Unidos	Alfonso Gabriel Lara conocido como Alfonso Gabriel Cárdenas Lara	Asesinato y robo	En fecha 2/05/04La C. S. J. emitió resolución resolviendo no ha lugar a la extradición por ser nacional. Se realizó en proceso en Nicaragua y fue condenado.
28-11-03	Costa Rica Juzgado Penal de San José	Edwin Rolando Velásquez Martín Y César Augusto Díaz Flores	Tráfico internacional de drogas	Al momento de la solicitud los extraditados habían sido condenados por

⁶³ Secretaría Ejecutiva, Ministerio Público de Nicaragua.

				tráfico internacional de drogas
07-01-04	Costa Rica Tribunal Penal San José	Roger Soto Venegas y Auxiliadora Cervantes González	Robo agravado	La C.S.J., no dio lugar a la solicitud debido a que no se hizo uso de la vía correspondiente tal y como lo establece el Código Procesal Penal
10-02-04	La Embajada de España en Nicaragua	Pablo García Traver	Agresión sexual en grado de tentativa y una por una falta de lesiones multa de un mes	En fecha 14/04/04 la C.S.J. emitió Notificación para que se cumpla con la extradición En fecha 22/03/04 por orden del Ministerio de Gobernación fue expulsado del país el señor García
12-07-04	Embajada de Francia en Nicaragua	Renato Campagno	Sustracción de niños	En fecha 06/04/05 la C.S.J. emitió Resolución de no ha lugar a la extradición por improcedente fundado en lo estipulado en el artículo 227 de Código Pn derogado
20-02-04	Embajada de Italia en Nicaragua	Alesio Casimirri	Asociaciones subversivas, banda armada, secuestro de personas, homicidio lesiones personales, hurto,	Resolución de la C S.J negando la Extradición, por haberse nacionalizado

			robo, violación a la ley sobre armas y otros	
14-02-06	Estados Unidos de Norteamérica	Fredy Tamir Centeno	Violación	En fecha 29/11/2006 la C.S.J. resolvió no dar lugar a la extradición debido a que se trataba de un nacional, pero se realizó el proceso en Nicaragua y fue condenado
19-09-06	Estados Unidos de Norte América	Carlos Newman Almanza	Asesinato	En fecha 20/04/2007 La Corte no dio lugar a la extradición por ser nacional
22-08-06	India	Nrusinh Kumar Lalgiri Goswami o Nrusinh Giri Lal Giri Goswami	Estafa, apropiación ilícita de bienes, ajenos y falsificación de pasaportes	En fecha 15/12/2008, la C.S.J. resuelve no ha lugar a la solicitud de Extradición, debido a que de acuerdo a los documentos que sustentan la extradición en el caso del delito de la Estafa estén queda demostrado que no hubo la misma y para el resto de delitos los documentos no son suficientes para sustentarlos.
09-05-07	Estados Unidos de Norteamérica	Humberto Javier Vega García y Rafael Gerardo	Conspiración para distribuir heroína	Todavía la C.S.J. no se ha pronunciado en

		Rodríguez		vista de que están cumpliendo condena en Nicaragua
--	--	-----------	--	--

Caso:

A continuación veremos paso a paso el trámite que se le dio a la siguiente solicitud de extradición pasiva y analizaremos si se cumple con lo establecido en el Código Procesal Penal.

En fecha cuatro de Noviembre de dos mil tres el Ministerio Público recibió solicitud de extradición pasiva remitida por el Ministerio de Relaciones proveniente de la Embajada de los Estados Unidos en Nicaragua del ciudadano nicaragüense Alfredo Gabriel López conocido como Alfredo Gabriel López López por el delito de asesinato y robo en perjuicio de Juana Morales y Julio Sarmiento. En fecha veinte de noviembre de dos mil tres el Ministerio Público a través de la Secretaría Ejecutiva de conformidad lo establecido en el artículo 353 del Código Procesal Penal remite a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia dicha Solicitud.

En fecha trece de Abril de dos mil cuatro la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia emite auto en el que señala “Por recibido el informe policial fechado en fecha cinco de Abril del corriente año, en el cual se pone a la orden de esta Sala de lo Penal al requerido de extradición por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, el ciudadano Alfonso Gabriel Lara también conocido como Alfonso Alfredo Gabriel López López, esta Sala provee: I- De conformidad con el Arto. 356 inciso 1º del Código Procesal Penal, prevéngasele al requerido que nombre abogado defensor para los trámites del proceso de extradición bajo el apercibimiento de nombrar de nombrarle uno de oficio en caso de no hacerlo. II.- Póngase en conocimiento al Ministerio Público de los presentes trámites extraditorios para los fines de su competencia....”.

En fecha dos de Junio de dos mil cuatro la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia emite Sentencia No.13 en la que Resuelve “De conformidad con lo expuesto, consideraciones hechas, disposiciones citadas, Boletines Judiciales citados y artículos. 43, 182 de la Constitución Política de Nicaragua; artículos. 51, 356 incisos 2 C.P.P.; artículo. 20 y 16. 3 e) del Código Penal, tratado de extradición del 1 de marzo de 1905, en nombre de la República de Nicaragua los suscritos magistrados dijeron: I) No ha lugar a la Extradición del ciudadano nicaragüense Alfredo Gabriel López López.- II) En consecuencia no ha lugar a la entrega de Alfredo Gabriel López López cuya extradición han solicitado las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos de América y de que se ha hecho mérito.- III) Póngase en conocimiento al Ministerio Público para que de conformidad al principio de Extraterritorialidad de la Ley Penal, artículo. 16.3 e) y párrafo final ejerza la acción penal correspondiente por los hechos que motivaron la presente solicitud de extradición. IV) Para los efectos de la acción penal que pudiera ejercer el Ministerio Público, respetando el plazo constitucional de las 48 horas contenido en el numeral 2.2 del artículo. 33 Cn. Póngase a la orden de la Policía Nacional al imputado Alfredo Gabriel López López.-V) Cópiese, notifíquese, publíquese y transcríbase lo resuelto al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que lo haga saber al gobierno requirente...”

En fecha cuatro de Junio de dos mil cuatro el Ministerio Público de Nicaragua presentó acusación ante el Juzgado Segundo de Distrito de lo Penal de Audiencias en contra de Alfredo Gabriel López López o Alfredo Gabriel López por el delito de asesinato atroz en perjuicio de Juana Morales y Julio Sarmiento.

En fecha dieciséis de Septiembre de dos mil cuatro el Juzgado Séptimo de Distrito de lo Penal de Managua emite sentencia en la que resuelve “Basándose en las consideraciones anteriormente dichas y de conformidad a los artículos 27,34 Cn artículos 1, 2, 3, 13, 29, 55, 134, 135, Pn, artículos 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15,

18, 20, 95, 134, 153, 154, 157, 159, 281, 282, 283, 321, 322, 323, CPP esta autoridad Falla: I.- Condénese al imputado Alfredo Gabriel López López a la pena principal de Treinta años de presidio por el delito de asesinato atroz en perjuicio de Juana Morales, cuya pena finalizará en fecha cuatro de junio del dos mil treinta cuatro debiendo cumplir la misma en el Sistema Penitenciario Nacional de esta ciudad. II.- Condénese al imputado Alfredo Gabriel López López la pena principal de treinta años de presidio por el delito de asesinato atroz en perjuicio de Julio Sarmiento, cuya pena finalizará en fecha cuatro de junio del dos mil treinta cuatro debiendo cumplir la misma en el Sistema Penitenciario Nacional de esta ciudad. III.- De conformidad al artículo. 89 Pn las penas se cumplirán de forma simultánea. IV.- Se le condena a las penas accesorias de la ley de conformidad al artículo. 55 Pn. V.- Déjese a salvo a la parte el ejercicio de la acción por la responsabilidad civil. VI.- en cuanto a las documentales que fueron incorporadas en juicio agréguese las mismas al Expediente 181-0507-04 VII.- Prevégasele a las partes del derecho que tienen de apelar de la presente resolución en los términos establecidos por la ley Notifíquese.

Analizando el caso antes señalado, podemos determinar que se cumplió con el *Procedimiento* establecido en el Código Procesal Penal en los artículos 353, referente a la extradición activa, una vez que el Ministerio Público recibió la solicitud de extradición la remite a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, posteriormente de acuerdo a lo establecido en el artículo 356 numeral 1 y 2 de Código Procesal Penal el requerido fue detenido y puesto a la orden de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, y antes de cumplido los dos meses de plazo que establece dicho Código para tramitar la extradición, la Sala de lo Penal de la Corte emitió Sentencia en la que no se da ha lugar a la solicitud de Extradición por razón de nacionalidad artículo 43 de la Constitución Política de Nicaragua.

Siguiendo con el análisis, una vez que la Sala de lo Penal de Corte Suprema de Justicia no da ha lugar a la solicitud de extradición en el numeral tres de la

Sentencia señala “III) Póngase en conocimiento al Ministerio Público para que de conformidad con el principio de extraterritorialidad de la Ley Penal, artículo. 16.3 e) y párrafo final ejerza la acción penal correspondiente por los hechos que motivaron la presente solicitud de extradición.” El artículo 16 numeral 3º literal e) del Código Penal derogado, establecía “La ley Penal de Nicaragua es aplicable: 3º A los que fuera de su territorio hubieren cometido alguno de los delitos siguientes: e) Los cometidos por un nicaragüense contra otro o contra un extranjero o por un extranjero contra un nicaragüense, siempre que el hecho también constituya delito en Nicaragua. Dicha disposición se encuentra en el Código Penal vigente en su artículo 19 “En ambos casos, si se solicita la extradición, el Estado de Nicaragua deberá juzgarlo por el delito común cometido...”.

10.2 Solicitudes de extradición activas

El Ministerio Público de Nicaragua a través de la Secretaría Ejecutiva de conformidad a lo establecido en el artículo 35 Inciso 8 del Decreto 133-2000 “Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público” y con fundamento en los artículos 349, 350 y 351 del “Código Procesal Penal de la República de Nicaragua ha solicitado las siguientes extradiciones activas:

Año	País	Procesado	Delito	Observaciones
02-09-04	Estados Unidos de Norte América	María Amalia Rocha Salazar	Hurto con abuso de confianza en perjuicio de TRANSERV O. M. S	La víctima llegó a un acuerdo con la parte y desistió de la solicitud de Extradición
01-11-05	Estados Unidos de Norte América Departamento de Estado	Ricardo Arguello Pravia	Homicidio en grado de frustración	No se pudo efectuar la Extradición, debido al fallecimiento del extraditado
28-08-06	República de Honduras		Trafico internacional de	Fue denegada por razones de

			estupefacientes	nacionalidad
12-06-07	Bolivia	Antonio Mena Abadia	Violación	Se nos informó que el acusado ha sido detenido y puesto a la orden de
15-05-08	Colombia	Rafael Berrios Berrogán y Eduardo Padilla Ballesteros	Tráfico internacional de estupefacientes psicotrópicos y otras sustancias controladas	La solicitud fue negada por ser ciudadanos colombianos
11-08-08	Costa Rica	Norma del Socorro Alemán Romero y Mauricio Pilarte Romero	Asesinato	La solicitud fue declarada ha lugar y se procedió a la entrega de los extraditados en el puesto fronterizo de Peñas Blancas en fecha 9/07/09
16-11-09	Guatemala	Paolo Coen Ubilla	Homicidio	En fecha 16/11/09 fue solicitada a la C.S.J la extradición y estamos a la espera de la Resolución

Caso:

A continuación veremos paso a paso el trámite que se le dio a la siguiente solicitud de extradición activa y analizaremos si se cumple con lo establecido en el Código Procesal Penal.

En fecha trece de Mayo del año dos mil ocho, la Fiscal Departamental de Granada solicita a la Secretaría Ejecutiva de inició la solicitud de extradición activa en contra de los acusados Manuel Porras Ramírez y Noelia del Socorro Alvarez

Ramírez por ser coautores del delito de asesinato en perjuicio de Matilde Alberto Berroteran Silva.

Debido a que en fecha veinte de Abril del año dos mil ocho se llevó a efecto audiencia preliminar en el Juzgado de Audiencias de Granada para Pedro Antonio Porras Ramírez y Sergio Antonio Sánchez Alvarado, únicos detenidos por el asesinato de Matilde Berroteran, en dicha audiencia también se solicitó al Juez de Audiencia gire orden de captura en contra de los acusados Manuel Porras Ramírez y Noelia del Socorro Alvarez Ramírez ya que por información obtenida por INTERPOL se logró la localización de los acusados en el vecino país de Costa Rica.

Por lo antes solicitado, en fecha dieciséis de Marzo de dos mil ocho el Ministerio Público a través de la Secretaría Ejecutiva solicita a Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia sea declarada procedente y tramitada la solicitud de extradición activa en contra de lo acusados Manuel Porras Ramírez y Noelia del Socorro Alvarez Ramírez por ser coautores del delito de asesinato en perjuicio de Matilde Alberto Berroteran Silva de conformidad con lo establecido en el artículo 35 numeral 8 del decreto 133-2000 “Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público”, artículos 349,350 y 351 del “Código Procesal Penal de Nicaragua” y artículo 1 numeral 1 del Tratado de Extradición entre Costa Rica y Nicaragua.

En fecha catorce de Julio de dos mil ocho, a las nueve de la mañana, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve: “I.- Declárese procedente la extradición activa promovida por el Ministerio Público en contra de los ciudadanos Manuel Porras Ramírez y Noelia del Socorro Alvarez Ramírez, debiendo hacerse el requerimiento de extradición a la República de Costa Rica, lugar donde se dice se encuentran radicados los ciudadanos en mención. II.- En consecuencia remítanse las diligencias al Ministerio Público para que realice los trámites

conducentes para lograr el objetivo de la presente extradición”. Auto remitido en fecha once de Agosto de dos mil ocho a la Secretaría Ejecutiva.

En fecha doce de Agosto de dos mil ocho, la Secretaría Ejecutiva procedió a remitir las diligencias de solicitud de extradición junto con el auto emitido por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua para que este a su vez remitiera dichas diligencias al Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica.

En fecha veintisiete de Agosto de dos mil ocho el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José Desamparados, Costa Rica, a las trece horas con treinta minutos. (Auto remitido a través del Ministerio de Relaciones Exteriores en fecha veinticinco de Septiembre de dos mil ocho). En éste se solicita la promesa formal de que este Gobierno se compromete a que los requeridos no serán juzgados por hechos distintos a los consignados en los documentos aportados en las presentes diligencias, ni con pena de muerte, ni con cadena perpetua, así mismo se solicita el texto y una explicación sobre la ley que permite la prescripción de la acción penal y donde se define el delito y la pena correspondiente.

Cabe mencionar que en cuanto a la prescripción y al delito en la solicitud que el Ministerio Público hiciera a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia se hace mención de los mismos.

Por lo que en fecha nueve de Octubre de dos mil ocho, la Secretaría Ejecutiva procedió a remitir comunicación a través del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Juez de Trámite del Tribunal de Desamparados de Costa Rica, en la que se le hace saber que el Ministerio Público solicitará a la Corte Suprema de Justicia se amplíe la solicitud de extradición incorporando lo solicitado por ese Tribunal y así mismo solicita prorroga de la fecha de detención de los acusados Mauricio Pilarte

Romero y Norma del Socorro Alemán Romero a fin de que no se venza dicho termino mientras se cumple con lo requerido por ese tribunal.

En fecha doce de Octubre de dos mil ocho se solicita a la Corte Suprema de Justicia se amplié la solicitud de extradición de los acusados Manuel Porras Ramírez y Noelia del Socorro Alvarez Ramírez incorporando lo requerido por el Tribunal de Desamparados de Costa Rica.

En fecha dos de Diciembre de dos mil ocho, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, a las ocho y siete minutos de la mañana, provee: I. Se admite la ampliación de la solicitud de extradición de que se ha hecho mérito, por lo que regresan estas diligencias al Ministerio Público, para que como institución de velar por estos trámites realice lo pertinente y sean enviadas al tribunal requerido por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua.

En fecha nueve de diciembre de dos mil ocho, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se remitió la solicitud de ampliación de extradición activa.

En fecha catorce de Enero de dos mil nueve, mediante Sentencia Número 09-2009, a las dieciséis horas y diez minutos resolvió: “Por tanto en virtud de lo expuesto, normas citadas y artículos 7, 20, 39 y 41 de la Constitución Política, se concede la extradición de los señores Manuel Porras Ramírez y Noelia del Socorro Alvarez Ramírez, formulada por el Gobierno de Nicaragua. Firme esta Resolución, ejecútese la misma mediante la entrega de los extraditables a las autoridades nicaragüenses para lo de su cargo. En virtud de lo dispuesto manténganse detenidos los extraditados hasta tanto se ejecuta la entrega. Son los gastos de entrega de traslado de los extraditables por cuenta del estado requirente. Sentencia que fue apelada por los extraditables.

En fecha veinte de Marzo de dos mil nueve, a las diez horas y quince minutos el Tribunal de casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Gocoechea, decidió dejar sin lugar el recurso de apelación.

En fecha veinte de abril de dos mil nueve, a las trece horas, el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial Desamparados dictó Resolución: “Encontrándose firme la sentencia de extradición de las siete horas treinta minutos del veintisiete de octubre de dos mil ocho, se previene al Estado requirente por medio de la Embajada de la República de Nicaragua en nuestro país, que dentro del termino de dos meses a partir de la notificación de la presente resolución, cumpla con las formalidades para proceder con la entrega material de los requeridos (indicación de hora, fecha y lugar de la entrega, oficiales del Gobierno solicitante que tendrán a cargo el traslado de los extraditables y demás).

De conformidad con el artículo 37 del Código Procesal Penal de Nicaragua el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron coordinaciones para recibir a los extraditados en la frontera de Peñas Blancas, estableciéndose como fecha el siete de Mayo de dos mil nueve a las diez de la mañana, sin embargo en fecha seis de Mayo en horas de la tarde los extraditados interpusieron un Recurso de Habeas Corpus, del cual fue informado el Ministerio Público y la Policía Nacional cuando ya se encontraban en la frontera, esto no permitió llevar a efecto la entrega.

En fecha diecinueve de junio de dos mil nueve, a las ocho horas, el Tribunal Penal del tercer Circuito Judicial de San José, Sede Desamparados dictó resolución: Habiéndose declarado sin lugar el Recurso de Habeas Corpus y por ende habiendo cesado la suspensión del plazo que fuera otorgado en resolución de las trece horas del veinte de abril del dos mil nueve. Se previene al Estado requirente por medio de la Embajada de la República de Nicaragua, cumpla con las formalidades para proceder con la entrega material de los requeridos, (indicación de hora, fecha y

lugar de la entrega, oficiales del Gobierno solicitante que tendrán a cargo el traslado de los extraditables y demás).

Por lo que en fecha nueve de Julio de dos mil nueve a las diez de la mañana funcionarios del Ministerio Público y de la Policía Nacional recibieron en la frontera de Peñas Blanca a los extraditados Manuel Porras Ramírez y Noelia del Socorro Alvarez Ramírez.

A los extraditados se les llevó a efecto la audiencia inicial con carácter de preliminar en fecha diez de Julio de dos mil nueve en el Juzgado de Distrito Penal de Granada y en fecha catorce de Octubre del año dos mil nueve a las once de la mañana, se dictó Sentencia en el Juzgado de Distrito Penal de Juicios en el que se resolvió: “se condena a Manuel Porras Ramírez y Noelia del Socorro Alvarez Ramírez se les impone la pena de diecisiete años de prisión por ser coautores del delito de asesinato en perjuicio de Matilde Alberto Berroteran Silva. Pena que deberán cumplir en el Sistema Penitenciario de esta ciudad. Se condena a los acusados a las accesorias de ley. No hay costas en el presente juicio.

Analizando el caso anterior podemos observar que, si bien, es cierto al final se cumplió tal y como lo señala Jiménez de Asúa en su definición con la entrega que un Estado (Costa Rica) hace a otro (Nicaragua) de individuo acusado (Manuel Porras Ramírez y Noelia del Socorro Alvarez Ramírez) o condenado que se encuentra en su territorio para que en ese país se le enjuicie penalmente o se ejecute la pena, sin embargo al comparar los términos establecidos en el Código Procesal Penal, con los términos que en la práctica se llevó a efecto desde que se hiciera la solicitud ante la Sala de lo Penal de Corte Suprema de Justicia, el Código Procesal Penal establece que la misma tiene 30 días para declarar procedente o no la solicitud. Sin embargo desde el dieciséis de Marzo de dos mil ocho que el Ministerio Público de Nicaragua a través de la Secretaría Ejecutiva hiciera la solicitud hasta el catorce de Julio de dos mil ocho en que la Sala de lo Penal de la

Corte Suprema de Justicia resolviera se llevó aproximadamente 4 meses, ha esto debemos sumar también el tiempo que se llevó en la ampliación de la solicitud de extradición activa una vez que fue recibida por la autoridad competente en Costa Rica el Tribunal de Desamparados quien hiciera una solicitud de ampliación.

Aún cuando se cumplía con las formalidades que establecía el Código Procesal Penal y el Tratado de Extradición entre Nicaragua y Costa Rica, el Tribunal de Desamparados de Costa Rica solicitó que de manera expresa el Estado de Nicaragua se comprometiera a que los extraditados no fuesen condenados ni a pena de muerte ni a otros delitos, asimismo se diera una explicación sobre la ley que permite la prescripción de la acción penal, donde se define el delito y la pena correspondiente, lo cual ya se encontraba definido en dicha solicitud, sin embargo el Ministerio Público de Nicaragua, solicitó a la Corte Suprema de Justicia de nuestro país se admitiera lo requerido por el Tribunal costarricense, para posteriormente, enviar por la vía correspondiente (diplomática) lo solicitado.

Si bien es cierto, el Código Procesal Penal no establece un término para la entrega de los extraditados en su artículo 357, sin embargo es importante señalar que una vez que el Tribunal ya había concedido la extradición activa y se habían hecho las coordinaciones para la entrega de los mismos, los extraditados solicitaron un recurso de apelación y posteriormente un recurso de exhibición personal, lo que retraso aún más la entrega de los mismos.

XI. Sistema regional de cooperación penal integrado por las Unidades de Cooperación Penal Internacional en los Ministerios Públicos de México, Centroamérica y República Dominicana

Es significativo destacar la labor que el Ministerio Público de Nicaragua a través de la Secretaría Ejecutiva ha venido realizando para la creación y fortalecimiento del área de Cooperación Penal Internacional y Extradición, esto, tomando en cuenta

que la institución ha ido en constante crecimiento y por ende la carga de trabajo ha aumentado, lo que ha permitido que aún con pocos recursos económicos y con poco personal humano y logística, se esté creando bajo la coordinación de la Secretaría Ejecutiva la Oficina de Cooperación Penal Internacional.

Lo anterior con el apoyo técnico de las organizaciones internacionales específicamente la Oficina de combate a la droga y el delito de las Naciones Unidas (UNODC) y Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), que han decidido apoyar la iniciativa de crear a nivel de la Región Centroamericana y República Dominicana, donde no existe una Oficina de Cooperación Penal Internacional, la creación de la misma, y donde ya exista fortalecerla, es por ello que dichas organizaciones han organizado en este año dos reuniones técnicas a nivel de región.

En abril del año 2009 se organizó en el Salvador una Reunión técnica de puntos de contacto para la cooperación internacional penal en las investigaciones dirigidas a perseguir los delitos de explotación sexual y comercial y trata transnacionales, con la participación de representantes de los países de Centro América y México en materia de cooperación penal internacional. En ese encuentro se analizó una propuesta sobre lineamientos para mejorar la cooperación penal internacional en estas materias y se tomaron acuerdos relacionados con el nombramiento de puntos de contacto en materia de cooperación penal internacional, la creación o fortalecimiento de las unidades que se encargan de estas materias en cada uno de los países, la revisión de los instrumentos internacionales que se utilizan regularmente para compartir información y elementos probatorios en la región, inclusive el instituto de la extradición y la implementación de mecanismos de coordinación estructurados, ágiles, seguros y ajustados a derecho que faciliten la tramitación efectiva de casos con ramificaciones internacionales y finalmente el bosquejo de un plan de capacitación para los puntos de contacto que fueran seleccionados. En esta reunión se planificó un nuevo encuentro para materializar la

capacitación y plasmar en mesas de trabajo una estructura definida de las unidades de cooperación penal internacional como parte de un sistema regional de cooperación penal. Adicionalmente, se diseñaron formatos para el manejo de las asistencias penales y la extradición.

Por lo que en octubre de 2009 se realizó en Costa Rica el segundo encuentro denominado El Taller sobre Cooperación Penal Internacional con la participación de los puntos de contacto nombrados por México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Quedó pendiente la posterior incorporación de un o una representante de República Dominicana. Las y los participantes forman parte de las unidades de la Procuraduría o el Ministerio Público dedicadas al tránsito de asistencias legales en materia penal que intercambian los países de la región en procura de incorporar elementos probatorios importantes que se encuentran en otros países diferentes al que inició la acción penal y lo referente a la tramitación de la Extradición⁶⁴.

El taller planteó tres objetivos básicos: 1. Ampliar el conocimiento de las y los participantes en temas relacionados directamente con la investigación y procesamiento de los delitos que comprenden la explotación sexual comercial y la trata de personas de acuerdo a la selección temática previa que se realizó en la reunión de El Salvador. 2. Realizar un análisis detallado de las cinco plataformas que conforman el sistema regional de cooperación penal (comunicaciones, tecnología, seguridad, Procedimientos y recurso humano) con la finalidad de identificar los elementos más importantes de cada una de ellas e incorporarlos en un manual especializado que se diseñará posteriormente. La plataforma de procedimientos contó con los formatos básicos que se diseñaron en la reunión de El Salvador. 3. Hacer un planteamiento de las siguientes fases en el desarrollo del

⁶⁴ La secretaría Ejecutiva se encuentra formulando un Manual de Extradición para Fiscales el que además de contener el Procedimiento que establece el Código Procesal Penal y los Tratados y Convenios suscritos y ratificados por Nicaragua, contendrá el procedimiento que se debe llevar a lo interno de la institución.

sistema regional de cooperación penal mediante disposiciones políticas y operativas que garanticen su sostenibilidad y eficacia con el apoyo de las organizaciones internacionales que apoyan esta iniciativa, específicamente la oficina de combate a la droga y el delito de las Naciones Unidas (UNODC) y Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD).

Con fundamento en las exposiciones, comentarios y observaciones, se puede concluir que el taller cumplió con los objetivos propuestos y sobrepasó las expectativas de los organizadores. La participación activa de los y las representantes de cada país tanto expositores como puntos de contacto proporcionó elementos muy importantes para la construcción de las plataformas operativas de las unidades de cooperación internacional y el mismo contacto y convivencia durante tres días de las y los participantes fortaleció los lazos en materia de asistencia penal entre todos los países, incluso Colombia, cuyo representante fue invitado como expositor. Este solo hecho enfatiza la importancia de las reuniones e intercambios de conocimientos y experiencias entre funcionarios (arias) que están directamente relacionados con el trabajo de campo en materia de cooperación penal internacional. La participación de los representantes de las organizaciones internacionales organizadoras (UNODC, ILANUD y OIT/IPEC), además de la representante de la Secretaría Técnica del Consejo centroamericano de Ministerios Públicos, como facilitadores (oras) y orientadores en la discusión y análisis de los temas garantizó una cobertura organizada y muy amplia de todos los aspectos consignados en la agenda.

En conclusión, quedaron claramente establecidas la visión, forma de trabajo y necesidades de cada uno de los países en materia de cooperación penal internacional. Al igual que la importancia de contar con herramientas estructuradas para la ejecución del trabajo cotidiano y la coordinación internacional con homólogos en la región. Se planteó un procedimiento inicial de comunicación entre

los puntos de contacto a través del órgano directivo del Sistema Regional de Cooperación Internacional que se está diseñando, específicamente, la Secretaría Técnica del Consejo Centroamericano de Ministerios Públicos⁶⁵.

XII. Conclusiones

- Contamos con Tratados y Convenios suscritos y ratificados por Nicaragua que datan de hace mas de cien años, a los cuales no se las ha dado un seguimiento para adecuarlos a la legislación interna hoy existente en nuestro país.
- Contamos con convenios suscritos pero que aún no han sido ratificados por Nicaragua tal como es el caso del Tratado Centroamericano relativo a la Orden de Detención y Extradición Simplificada, tratado de mucha importancia para la Región Centroamericana en la lucha contra la delincuencia organizada, ya que con el se pretende suprimir la fase administrativa que establece el procedimiento ordinario de Extradición, lo que permitiría que los estados requeridos unifiquen esfuerzos con el propósito de ubicar e identificar a la persona señalada en una orden detención y extradición simplificada.
- Contamos con un procedimiento para la extradición establecido dentro del Código Procesal Penal, el cual no establece el procedimiento administrativo que se debe de seguir, la vía por la cual debe de entrar una solicitud de extradición pasiva, lo cual si esta establecido en algunos tratados, pero no de manera explicita en el Código de Procedimiento Penal.
- El Código Procesal Penal establece términos precisos en cuanto a la tramitación de las extradiciones activas, sin embargo vemos que en el caso que se presenta no se cumplió con dichos términos.

⁶⁵ Taller Cooperación Penal Internacional y su aplicación Dirigido a: Puntos de Contacto de las Unidades de Cooperación Penal Internacional en México, Centro América y República Dominicana , Costa Rica 27-29 de octubre de 2009.

XIII. Recomendaciones

- Se recomienda al Estado de Nicaragua que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se actualicen los Convenios y Tratados de Extradición suscritos y ratificados por Nicaragua, con el objetivo de adecuarlos a la legislación interna, ya que muchos de los convenios y tratados tienen más de cien años de haberse suscrito y ratificado.
- Se recomienda al Estado de Nicaragua ratificar los convenios y tratados que han sido suscritos como son Convención Interamericana sobre extradición, suscrito en Caracas, Venezuela, en fecha 25 de febrero de 1981. Nicaragua lo suscribió en esa misma fecha y el Tratado Centroamericano Relativo a la Orden de Detención y Extradición Simplificada, suscrito en fecha 2 de Diciembre de 2005.
- Se recomienda al Estado de Nicaragua crear una Ley especial de extradición, la cual debe de contener además de lo establecido en el Código Procesal Penal otros tipos de extracción como es la extradición voluntaria, la reextradición, la extradición de tránsito y la ampliación de extradición.
- Se recomienda al Estado de Nicaragua eliminar los trámites burocráticos que dificulten y dilaten el procedimiento de extradición, ya que el agilizar los trámites permite que los otros Estados tenga más confianza en el Sistema de Justicia nicaragüense.

Bibliografía

Textos

- 1) Caracterización del delito político de la OEA citado en Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; *Terrorismo o rebelión. Propuestas de regulación del conflicto armado*, Bogotá, diciembre de 2001.
- 2) Cuarezma Terán Sergio J., Recopilación de Tratados Internacionales en Materia Penal.
- 3) Cuerda Riezu Antonio, Voces Enciclopedias Civitas.
- 4) Dirección General de Asuntos Jurídicos, Soberanía y Territorio / MINREX.
- 5) Enciclopedia Jurídica OMEBA, Buenos Aires, Argentina, Editorial Bibliografica, 1964.
- 6) Gaete González Eugenio, *La Extradición ante la Doctrina y la Jurisprudencia*, 1935-1965, Escuela de Derecho de Valparaíso, Editorial Jurídica de Chile, 1972.
- 7) GALLINO YANZI, C. V. *Extradición*, En Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XI Esta-Fami, Diskril S. A., Buenos Aires, 1977.
- 8) Gómez Robledo Verduzco Alonso; *Extradición en Derecho Internacional. Aspectos y tendencias relevantes*. Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie H: Estudios de Derecho Internacional Público N° 24, Segunda Edición, 2000.
- 9) Guía Jurídica del Secretario General de la OIPC-INTERPOL a los Jefes de las oficinas Centrales. Nacionales, Lyón, 16 de marzo de 1998.
- 10) Jiménez de Asúa, citado por Gaete González, Eugenio. *La Extradición ante la Doctrina y la Jurisprudencia*. Escuela de Derecho de Valparaíso, Santiago de Chile, editorial Andrés Bello, 1972.
- 11) Jiménez de Asúa, *Tratado de Derecho Penal* Editorial Losada S. A., Buenos Aires, 1964.
- 12) Jiménez de Asúa, *Introducción al Derecho Penal*, Volumen 1. Editorial Losada S. A., Buenos Aires, 1964.

- 13) Jiménez Becerra, Héctor Daniel. El Procedimiento de Extradición, Primera Parte, Universidad Panamericana, Facultad de Derecho (coautor corporativo), México, Facultad de Derecho, 2000.
- 14) Moro Tomás, Diccionario Jurídico Fundación, Espasa Calpe, Madrid 1992.
- 15) Taller Cooperación Penal Internacional y su aplicación Dirigido a: Puntos de Contacto de las Unidades de Cooperación Penal Internacional en México, Centro América y República Dominicana , Costa Rica 27-29 de octubre de 2009.

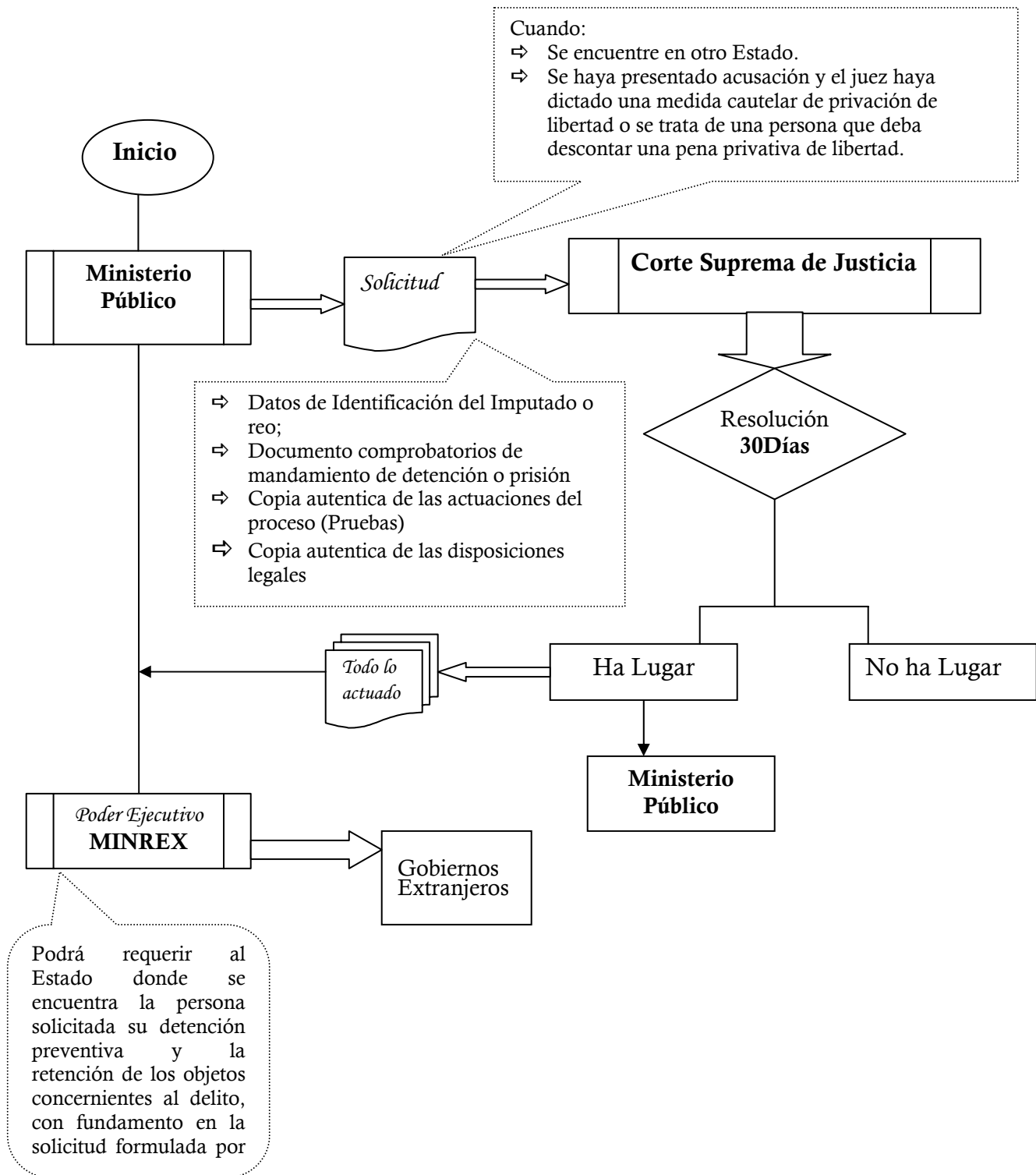
Legislación

- 16) Constitución Política de Nicaragua y sus Reformas: Compilación: Centro de Documentación e Información Judicial. Managua: Ediciones Centro de Documentación e Información Judicial, 2007.
- 17) Decreto No. 118 – 2001 Reformas e incorporaciones al Reglamento de la Ley No. 290; Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo
- 18) Ley No. 641 Código Penal, Publicada en La Gaceta Nos. 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7, 8 y 9 de Mayo del 2008.
- 19) Ley No. 406 Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 243 y 244 del 21 y 24 de Diciembre del 2001.

Consultas en línea

- 20) Arroyo Gutiérrez, José Manuel. La extradición. Nociones y Principios Generales, en: Ciencias Penales. Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. Año 1, No. 1. www.fgr.cu/.../Extradicion/LA%20EXTRADICION%202.doc, consultado el 21 de Octubre de 2009.
- 21) Participación de la Señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en EL XIII Simposium Internacional de derecho “Tendencias jurídicas del siglo XXI”, Organizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 19 de Octubre de 2001. www2.scjn.gob.mx/Ministros/.../Extradición, consultado el 11 de Noviembre de 2009.
- 22) Trocolli Lugo, José Vicente La extradición, es un proceso por el cual un Estado entrega una o varias personas que se hayan en su territorio, a las autoridades de otro Estado, www.elporvenir.com.mx, consultado el 20 de Agosto de 2009.

EXTRADICIÓN ACTIVA (Vid. Arts.351 y 352 CPP)



EXTRADICIÓN PASIVA (Vid. Arts. 353,356 y 357 CPP)

